

## PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

(VE-120)

### RESUMEN EJECUTIVO

<b>Prestatario:</b>	República Bolivariana de Venezuela		
<b>Agencia ejecutora:</b>	Ministerio de Salud y Desarrollo Social por medio del Viceministerio de Desarrollo Social		
<b>Monto y fuente:</b>	IDB: (OC)	US\$	30,000,000
	Local:	US\$	20,000,000
	Total:	US\$	50,000,000
<b>Términos y condiciones:</b>	Plazo Amortización:	25	Años
	Periodo de Gracia:	4 ½	Años
	Desembolso:	4	Años
	Tasa de Interés:	variable	
	Inspección y vigilancia:	1.00	%
	Comisión de crédito:	0.75	%
	Moneda:	Dólares de los E.E.U.U. provenientes de la Facilidad Unimonetaria.	
<b>Objetivos:</b>	El Programa tiene por objetivo apoyar al gobierno en los esfuerzos para garantizar los derechos de los niños y adolescentes desde su concepción hasta los 18 años. Este apoyo se realizará financiando la implantación de una nueva institucionalidad encargada de esta tarea. Los objetivos específicos son: i) apoyar la gestión de los órganos que conforman el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente (SPNA); ii) financiar proyectos que sean consistentes con esta nueva institucionalidad; y iii) apoyar el fortalecimiento de la capacidad de seguimiento y evaluación del SPNA, especialmente en el nivel central encargado de diseñar la política del sector.		
<b>Descripción:</b>	El Programa incluye tres componentes: i) implantación del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente (SPNA); ii) financiamiento de proyectos; y iii) monitoreo y evaluación del Programa.		

El **componente de implantación del SPNA** incluye las actividades requeridas para apoyar la implantación de los principales órganos del sistema: el Consejo Nacional de Derechos, los Consejos de Derechos Estadales y Municipales, los Consejos de Protección del Niño y Adolescente, las Defensorías del Niño y del Adolescente y las Entidades de Atención. Se considera para ello tres subcomponentes: i) Fortalecimiento Institucional; ii) Sistema de Información y iii) Comunicación, Mercadeo Social y Participación.

El subcomponente de fortalecimiento institucional apoyará la gestión de los órganos de dirección y administración del SPNA y de las gobernaciones y alcaldías participantes del Programa con el objeto de asegurar la sostenibilidad institucional. A fin de apoyar el desarrollo de las capacidades técnicas y operativas de estos órganos, el Programa financiará las siguientes actividades: i) capacitación, ii) estudios, iii) asistencia técnica y iv) adquisición de equipos.

El subcomponente de sistemas de información está destinado a apoyar a los órganos administrativos del SPNA y en especial a los Consejos de Derechos –a nivel nacional, estatal y municipal– en el diseño e implantación de un sistema de información integrado.

El subcomponente de comunicación, mercadeo social y participación financiará acciones que tienen como objetivo: i) apoyar la difusión, conocimiento y valoración del SPNA; ii) fomentar la creación de una cultura de derechos y deberes del niño y del adolescente movilizándolo y estimulando la participación y la corresponsabilidad de los distintos actores del sistema: familia, sociedad y gobierno; iii) iniciar acciones que lleven a la adopción de buenas prácticas de crianza y de protección de niños y adolescentes; y iv) informar sobre el Programa.

El componente de **financiamiento de proyectos** tiene por objeto estimular a los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad a adoptar la nueva institucionalidad, el Programa contempla apoyar el financiamiento de proyectos en los gobiernos locales y en las comunidades que hayan iniciado acciones de implantación del SPNA.

Los recursos del Programa que se destinarán a financiar proyectos se distribuirán geográficamente utilizando como parámetro de asignación la población de cada estado en situación de pobreza extrema. Asimismo, el monto de los recursos que se asignará a cada municipio elegible, será proporcional a la población en situación de pobreza extrema residente en el respectivo municipio.

El Programa ha considerado necesario limitar los tipos de

proyectos elegibles a seis, considerados los de mayor importancia e impacto inmediato, tres en el área de atención y tres en el área de prevención.

En el área de atención se incluyen las siguientes líneas de inversión: i) desintoxicación ambulatoria de adicciones a drogas; ii) atención a la población sometida a medidas administrativas y a sanciones, iii) y atención a la población sometida a medidas provisionales y de excepción.

En el área de prevención serán elegibles las siguientes líneas de inversión: i) apoyo a la participación comunitaria en la vigilancia de derechos y deberes de la población; ii) apoyo al desarrollo de estructuras familiares; y iii) actividades formativas de prevención en vulneración de derechos.

Para la preparación del Programa se financió el Plan de Acción Inmediata (PAI) (ver 1.16), cuya ejecución permitió confirmar importantes aspectos que se utilizaron para el diseño de este componente. Entre éstos, se pueden mencionar: i) la existencia de una demanda importante de las comunidades para este tipo de proyectos; ii) la existencia de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) con suficiente capacidad para diseñar y ejecutar proyectos acordes con la nueva institucionalidad; y iii) el sector privado aporta recursos complementarios en estos proyectos. Lo anterior permite prever que, una vez terminado el apoyo del Programa, la sostenibilidad de las actividades no constituirá un riesgo para la operación.

**El componente de monitoreo y evaluación del Programa** está dirigido a diseñar e implantar un sistema de monitoreo y evaluación permanente que permita identificar y corregir de manera oportuna eventuales problemas durante la ejecución del Programa. Para ello, se financiará la contratación de una firma consultora independiente con comprobada experiencia en evaluaciones y auditorías de gestión, especialmente en el sector social, que efectuará la labor antes mencionada incluyendo el desarrollo de los indicadores de gestión y que verificará los alcances, resultados y potencialidades de las actividades que se vayan ejecutando.

Con el objeto de institucionalizar el sistema de monitoreo y evaluación, la firma consultora también diseñará y apoyará la implantación de una unidad de Monitoreo y Evaluación dependiente del CND.

La firma además capacitará a los profesionales de esta unidad, la cual se encargará en forma permanente de continuar con la labor

de monitoreo y evaluación una vez finalizada las labores de la firma.

**Estrategia del Banco en el país y sector:**

La estrategia del Banco en el país enfatiza dos objetivos interrelacionados: i) el alivio a la pobreza y el desarrollo del capital humano; y ii) la participación de la sociedad civil y la mejoría de la prestación de servicios de las instituciones regionales y locales en las acciones del sector social. El Programa en estudio tiene como objetivo básico apoyar acciones que cumplen con ambas premisas, centradas en este caso en la niñez y adolescencia.

**Revisión social y ambiental:**

El documento de perfil II fue presentado y aprobado por el CESI en su sesión del 4 de agosto del 2000, no solicitándose acciones posteriores. Las recomendaciones del mencionado comité en relación a los temas de género e indígena fueron incorporadas al documento.

**Beneficios:**

La implantación del SNPNA contenido en la LOPNA que se apoya con el Programa, crea los organismos e instrumentos para que los derechos de niños y adolescentes sean ejercidos con la participación directa de las comunidades y las familias.

Se espera contribuir a incrementar en los tres niveles de gobierno su capacidad de identificación de prioridades, planeamiento y aumento de la eficiencia en el uso de los recursos que actualmente destina el país a la problemática de la niñez y adolescencia.

Con la mejora en la perspectiva de vida de los niños y adolescentes se logrará que, en su vida adulta, tengan mayores oportunidades al mercado de trabajo, disminuir las posibilidades de entrar en conflicto con la ley y alcanzar una mayor integración en la vida cotidiana.

La participación directa de los gobiernos locales junto con la comunidad en la identificación y ejecución de estas acciones es un elemento de gran poder motivador, lo que permite un resultado social altamente positivo y con elementos de apropiación del Programa por los actores relevantes del proceso.

La ejecución de aproximadamente 230 proyectos permitirá generar capacidades para atender o prevenir la vulneración de los derechos de niños y adolescente, en especial de aquellos provenientes de familias pobres.

**Riesgos:**

Un aspecto central para la ejecución del Programa es la coordinación inter-institucional y al interior de los niveles de gobierno. La programación de las actividades del Programa en coordinación entre Consejos de Derechos, gobernaciones y alcaldías, así como otras intervenciones, reducirá este riesgo.

La implantación del SPNA requiere de una capacidad institucional elevada. Para reducir el riesgo se fortalecerá con el Programa una masa crítica de recursos humanos de los diferentes niveles de gobierno por medio de actividades de capacitación, asistencia técnica y asesoramiento en materia de seguimiento y monitoreo.

**Condiciones contractuales especiales:**

El Programa tendrá las siguientes condiciones previas al primer desembolso: i) creación de la UCP y la designación del coordinador general y coordinadores de los componentes (ver párrafo 3.8), ii) convenio de administración financiera con FONVIS (ver párrafo 3.15), iii) haber suscrito las Cartas de Compromiso de Inicio de Actividades con los tres estados que participarán en el Programa en el primer año (ver párrafo 3.17), iv) haber iniciado la licitación de la firma independiente para el monitoreo y evaluación del Programa (ver párrafo 3.37), v) apertura de "Cuentas Especiales" en divisas y en moneda nacional (ver párrafo 3.39), y vi) puesta en vigencia del Reglamento Operativo (ver párrafo 3.42).

Adicionalmente, la contratación de la firma consultora deberá estar terminada antes de comprometer el 10% del financiamiento (ver párrafo 3.37).

**Clasificación del sector social y de la pobreza:**

Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos. (Documento AB-1704). También, esta operación califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI) (ver párrafos 4.6 y 4.7). El prestatario utilizará el 10% de financiamiento adicional (ver párrafo 2.48).

**Excepciones a las políticas del Banco:**

Ninguna.

**Adquisiciones:**

Para la adquisición de bienes relacionados con el Programa, financiados total o parcialmente con recursos del préstamo, deberá utilizarse el sistema de licitación pública internacional en todos los casos en que el valor de las adquisiciones exceda el equivalente de US\$ 350,000. Las licitaciones se sujetarán a los procedimientos que constarán como Anexo B del Contrato de Préstamo. Para los bienes adquiridos totalmente con recursos de la contrapartida local se aplicará la legislación nacional. El Programa no contempla la

realización de obras civiles.

La contratación de servicios de consultoría se hará de acuerdo a los procedimientos del Banco, que constarán como Anexo C del Contrato de Préstamo.

## **I. MARCO DE REFERENCIA**

### **A. Introducción**

- 1.1 Desde el inicio de su administración, el Gobierno de Venezuela ha venido planteando profundos cambios en el campo político, económico y social. En este último, un lugar de privilegio lo ocupa la atención de la niñez y adolescencia, estableciendo que esta tarea no es sólo una obligación del Estado, sino que es de responsabilidad de toda la sociedad. Con base en esta prioridad y en los acuerdos adoptados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño organizada por las Naciones Unidas en 1989, el país dictó la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), la cual entró en vigencia en abril del 2000. La tarea que le impone al país el cumplimiento de este mandato legal requerirá, entre otros, grandes esfuerzos de coordinación, de desconcentración administrativa, de descentralización de recursos y de capacidad institucional en los gobiernos regionales y municipales.
- 1.2 A diferencia de la visión tradicional que dejaba en manos de un juez la solución de los problemas de la infancia y adolescencia, tanto en los casos que los niños y jóvenes requieren soluciones porque sus derechos se encuentran bajo amenaza o han sido vulnerados (víctimas), como en aquellos otros donde ellos son quienes vulneran los derechos de los demás (victimarios); la doctrina de la Protección Integral contenida en la LOPNA concede un tratamiento diferenciado para cada situación: a los primeros se les aplica medidas de protección a través de autoridades administrativas (Sistema de Protección del Niño y del Adolescente – SPNA), y a los segundos se les sanciona con una finalidad socioeducativa a través de autoridades judiciales (Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente).
- 1.3 La operación que se propone busca apoyar al gobierno en la implantación de esta nueva institucionalidad, encargada de velar por los derechos de los niños y adolescentes, en tres aspectos: i) fortalecer la capacidad de los gobiernos –nacional, estatal y municipal–; ii) financiar proyectos en consistencia con esta nueva institucionalidad; y iii) fortalecer la capacidad de seguimiento y evaluación, especialmente en el nivel central encargado de diseñar la política del sector. La contribución del Programa será especialmente importante para iniciar el proceso de implantación del SPNA contenido en la LOPNA.

### **B. Situación macroeconómica**

- 1.4 Desde que el Presidente Hugo Chávez ganó las elecciones en diciembre de 1998, Venezuela viene atravesando por un período de cambios estructurales políticos, económicos y sociales. En el campo político, en diciembre de 1999 se aprobó una nueva Constitución y en julio del 2000 el gobierno consolidó su posición al ganar las elecciones para la Asamblea Nacional Unicameral y ratificar al actual presidente por un período de 6 años. Se espera que los próximos 12 meses sean muy activos en la definición de temas de interés nacional que abarcan los ámbitos económico, financiero y de la administración pública. También se espera que la Asamblea Nacional apruebe la Ley Habilitante que le permitirá el ejecutivo legislar durante 12 meses -hasta octubre del 2001- en áreas que incluyen, entre otras, la

Ley de Tierras y Desarrollo Rural, Ley del Marco de Economía Social, y la Ley de Reforma de Hidrocarburos.

- 1.5 En este contexto de cambios estructurales políticos, el gobierno está comprometido en reactivar la economía después de dos años: 1998 y 1999, durante los cuales el sector real acumuló una contracción de 7.3%. La estrategia del gobierno incluye el uso de los recursos provenientes del incremento del precio internacional del petróleo para financiar iniciativas que promuevan el crecimiento de acuerdo a sus líneas de acción. Por esta razón, el gasto público corriente y de inversión se incrementó en 33% en términos reales durante el primer semestre del 2000, la economía creció 0.3% y 2.6% el primer y segundo trimestre del 2000 y la inflación se estima en un 15% para el año. El balance de la cuenta corriente externa refleja el incremento de los ingresos petroleros y probablemente termine el año con un superávit de US\$ 11,600 millones -más del doble que en 1999-, y las reservas internacionales sumarían aproximadamente US\$ 20,000 millones que incluyen alrededor de US\$ 3,000 millones para el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica.
- 1.6 El gobierno es consciente que la sostenibilidad financiera de la estrategia de reactivación depende de que el precio del petróleo se mantenga, y por lo tanto ha tomado el liderazgo en la OPEP para conservar la política de producción petrolera. A finales de septiembre, Venezuela fue el anfitrión de la segunda reunión de jefes de estado desde la fundación de la OPEP. Como resultado de esta reunión, la OPEP tratará de mantener los niveles de producción a niveles que aseguren que el precio del petróleo esté entre US\$ 22-28 por barril. Hasta ahora esta política ha tenido éxito y, como consecuencia, a finales de septiembre el precio del petróleo venezolano estaba alrededor US\$ 30 por barril, 50% mayor que hace un año. No obstante la volatilidad histórica del precio del petróleo, en el corto plazo no hay indicadores que sugieran cambios bruscos en el precio del crudo venezolano.
- 1.7 La reactivación económica alcanza a la industria petrolera y a la industria nacional que vende bienes y servicios al Estado; y en menor nivel al resto del sector privado. La Bolsa de Valores de Caracas, sin embargo, refleja el incremento del precio de los activos nacionales cuando el precio del petróleo sube y ha mostrado una recuperación significativa creciendo 55% desde diciembre de 1998 a septiembre del 2000. Los bonos del estado venezolano en mercados internacionales se mantienen estacionarios con un spread de alrededor 800 bp comparado con bonos similares americanos. Las agencias que miden el riesgo país clasifican a Venezuela muy por debajo de la categoría de inversión, reflejando la volatilidad histórica del precio del petróleo y el actual período de transición política.
- 1.8 En el ámbito social, la crisis económica de los noventa y la disminución de la inversión social en la última década llevaron a un deterioro sostenido de los principales indicadores sociales de Venezuela, destacándose el crecimiento del desempleo (11%) y del trabajo informal (49.5%). Las cifras disponibles para 1998-99 indican que, de los 24 millones de habitantes que tiene el país, el 49% de



los hogares están bajo la línea de pobreza y que el 22% de la población vive en condiciones de extrema pobreza.

### **C. Situación de los niños y adolescentes**

- 1.9 Los menores de 18 años representan el 41% del total de la población: los niños hasta los 12 años son el 30% y los adolescentes el 11% restante. A pesar de la diferencias y limitados alcances de las fuentes de información en materia de niños y adolescentes<sup>1/</sup>, éstas coinciden en reflejar que el empobrecimiento acelerado de la población ha tenido profundas repercusiones en las relaciones familiares y comunitarias y ha contribuido en el aumento de la vulnerabilidad de niños y adolescentes.
- 1.10 **En materia de salud** esta vulnerabilidad se refleja en los siguientes indicadores: i) la tasa de mortalidad infantil es de 22 por mil nacidos vivos registrados y la mortalidad de niños menores de cinco años es de 27 por mil nacidos vivos registrados lo cual sitúa al país en el promedio latinoamericano; ii) el 12% de niños nacen con bajo peso (menos de 2,500 gramos) lo cual representa uno de los mayores porcentajes de América Latina y el Caribe; y iii) el 24% de los niños menores de seis años así como el 29% de los niños y adolescentes entre 7 a 14 años, registran déficit nutricional.
- 1.11 **En materia de educación** la tasa de escolaridad de los niños de 3 a 5 años es del 44%, entre los 6 a los 11 años es de 90% y la de los adolescentes de 15 años es apenas de 55%, estas tasas son de las más bajas de los países de la región.
- 1.12 **En otros temas** i) el 24% de los niños entre 9 a 12 años y el 74% de los adolescentes entre 13 a 17 años trabajan; y ii) el 24% de los niños y adolescentes entre 9 a 17 años consumen alcohol y un 19% otras sustancias psicoactivas.

### **D. Características de los programas de atención a niños y adolescentes**

- 1.13 El país tiene en ejecución varios programas de carácter preventivo y/o asistencialista en favor de la infancia y adolescencia, la mayor parte por medio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y de instituciones adscritas al mismo.
- 1.14 Entre los principales programas en ejecución se pueden indicar: i) Programa de Hogares y Multihogares de Cuidado Diario, dirigido a menores de 6 años en situación de pobreza y que no están incorporados a la escuela; incluye nutrición, salud y desarrollo infantil y es ejecutado por el Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA); ii) Programas de Atención a Menores de 18 años, administrados por el Instituto Nacional del Menor (INAM)<sup>2/</sup>; incluyen acciones preventivas, de protección y de recuperación de menores infractores; y iii) Programa de Alimentación Escolar y Programa de

---

<sup>1/</sup> INAM, OCEI, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

<sup>2/</sup> El INAM, según el nuevo marco legal, seguirá funcionando hasta que complete la transferencia de sus programas y servicios a los estados y municipios.

Desayuno, Merienda y Comedores Escolares, ejecutados por el Ministerio de Educación y dirigidos a la niñez en los niveles preescolar, básico y educación especializada; consisten en alimentos diarios balanceados que cubren al menos el 30% de los requerimientos nutricionales. Adicionalmente, existen varios programas manejados y financiados por gobernaciones, municipios o por entidades de la sociedad, que intentan responder a necesidades específicas de los niños y jóvenes en situación de riesgo.

- 1.15 No obstante, los programas en ejecución deberán ser paulatinamente adaptados a la nueva institucionalidad y principios establecidos en la LOPNA. En tal sentido, durante la ejecución se prevé analizar estos programas e ir definiendo su proceso de adecuación al nuevo marco legal.
- 1.16 Con la finalidad de fortalecer o expandir programas existentes en favor de los niños y adolescentes y en el contexto de la nueva Ley, el gobierno estableció un Plan de Acción Inmediata (PAI). Para el financiamiento de dicho plan se canalizaron recursos del Programa de Apoyo a las Iniciativas de la Sociedad Civil (PAIS)<sup>3/</sup> cuyo objetivo es apoyar la participación de la sociedad civil en programas de carácter social. Se financiaron proyectos de prevención y protección en las áreas de niñez en situación de abandono, consumo de drogas, atención integral comunitaria y embarazo adolescente. La ejecución del PAI está a cargo de la unidad creada en el Viceministerio de Desarrollo Social para coordinar la preparación del presente Programa (UCP) y se viene llevando a cabo en tres municipios del área Metropolitana de Caracas, donde se concentra un alto porcentaje de la población meta. A octubre del 2000, 25 proyectos de la sociedad civil se encuentran en ejecución. El financiamiento del Banco comprometido asciende a US\$1.5 millones.
- 1.17 Paralelamente, el gobierno ha venido implementando otras acciones complementarias en apoyo a la niñez y adolescencia. La más importante se refiere al Programa Niños de la Patria. Este Programa, que está bajo la responsabilidad del Viceministerio de Desarrollo Social, contempla la adecuación de dos instalaciones existentes en apoyo a niños y adolescentes en situación de riesgo. La primera de estas instalaciones corresponde al Helicoide, edificación ubicada en el centro de Caracas y que podrá atender a una población de 220 personas. Su objetivo es servir de permanencia temporal para niños y adolescentes que viven en la calle y que requieren de atención especializada en diversas áreas, y de ser el caso ubicar y trabajar con sus padres para lograr su reinserción familiar.<sup>4/</sup> El otro proyecto incluido en Niños de la Patria es el centro Los Caracas, ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Caracas y cuyo objetivo es dar albergue y atención especializada con una finalidad socioeducativa a aproximadamente 1,500 niños y adolescentes en estado de abandono por sus familias.

---

<sup>3/</sup> El PAIS es administrado por el Fondo de Inversión Social de Venezuela (FONVIS), financiado por el Banco (1045/OC-VE).

<sup>4/</sup> El proyecto Niños de la Patria contó con el asesoramiento en materia de capacitación a educadores de la calle de especialistas internacionales de Casa Alianza, entidad con gran experiencia en diversos países en el trabajo con niños y adolescentes que viven en la calle.

- 1.18 Pese a los esfuerzos antes mencionados, el país llegó al consenso de que el Estado no puede responder en forma aislada a la creciente demanda por servicios en favor de niños y adolescentes cuyos derechos vienen siendo vulnerados y que sólo tendrá éxito en esta gestión si se une en forma coordinada y sistemática con la sociedad y las familias. Todo esto llevó al diseño de una profunda reforma en materia de niños y adolescentes que se reflejó en la promulgación de la LOPNA. Dicha reforma consiste en superar la visión tradicional hacia los menores de compasión-represión y de tutela por parte del Estado (Paradigma de la Situación Irregular), por un sistema donde todos los niños y adolescentes son sujetos de plenos derechos (Doctrina de la Protección Integral).

## **E. La Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente**

- 1.19 El 1 de abril del 2000 entró en vigencia la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA). Esta Ley, que fue promulgada en octubre de 1998, recoge los compromisos asumidos por el país en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1989 y se gestó luego de un amplio consenso nacional donde participaron la sociedad civil, universidades, instituciones gubernamentales, los niños y adolescentes e instituciones internacionales especializadas como la UNICEF.
- 1.20 Atendiendo al principio que establece que debe ser la sociedad en su conjunto la responsable de hacer efectiva la garantía de los derechos de los niños y adolescentes, la LOPNA plantea una profunda reforma institucional. Se crea el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente (SPNA) como una estructura descentralizada e integrada por entes del sector público y de la sociedad, con atribuciones planificadoras, coordinadoras, controladoras y ejecutoras, de modo de establecer una red de atención, defensa y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. En esta nueva situación, la familia tiene un rol protagónico.
- 1.21 En este contexto, el SPNA está integrado básicamente por: i) Organos Administrativos: a) Consejo Nacional de Derechos (CND); b) Consejos Estadales de Derechos (CEDs); c) Consejos Municipales de Derechos (CMDs); y d) Consejos de Protección; ii) Defensorías del Niño y del Adolescente; y iii) Entidades de Atención.
- 1.22 El Consejo Nacional de Derechos es la máxima autoridad del Sistema con carácter autónomo y personalidad jurídica propia encargada de formular la política y dar los lineamientos generales en materia de niños y adolescentes. Está conformado por 14 miembros no remunerados (7 del Poder Ejecutivo y 7 de la sociedad civil). Los Consejos Estadales de Derechos y los Consejos Municipales de Derechos, –a ser creados en cada estado y municipio– al igual que el CND, están compuestos por miembros no remunerados y ejercerán las funciones planificadoras dentro del ámbito de su jurisdicción.
- 1.23 Los Consejos de Protección son entes que deben conformarse en cada municipio con el encargo de proteger de amenaza o violación a los derechos de los niños y adolescentes. Sus miembros son remunerados y deberán ser mínimo tres.

- 1.24 Las Defensorías del Niño y del Adolescente son un servicio organizado y desarrollado por los municipios o la sociedad con el objetivo de promover o defender los derechos de los niños y adolescentes bajo los principios de gratuidad, confidencialidad y de carácter orientador y no impositivo.
- 1.25 Las Entidades de Atención, son instituciones, públicas o privadas, que ejecutan programas de atención a la niñez y adolescencia, medidas y sanciones.
- 1.26 En cuanto al Sistema Penal, está conformado por nuevos órganos jurisdiccionales (Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia) y el Ministerio Público a través de fiscales especializados.
- 1.27 La LOPNA establece la creación de mecanismos financieros (Fondos de Protección del Niño y del Adolescente) cuyos recursos se deben reflejar en los presupuestos nacional, estatales y municipales y que sólo pueden ser utilizados para financiar programas específicos de protección y atención de niños y adolescentes.
- 1.28 Cabe destacar el firme compromiso del país en implantar esta nueva institucionalidad. A seis meses de la fecha en que la LOPNA entró en vigencia, están en funcionamiento el Consejo Nacional de Derechos y 11 de los 24 Consejos Estadales de Derechos (CEDs) –incluido el Distrito Federal Libertador– a ser creados en todo el país. Asimismo, seis alcaldías han establecido sus Consejos Municipales de Derechos y una de ellas un Consejo de Protección. Con las actividades del Programa se espera incrementar y consolidar la participación de más gobiernos locales, sociedad civil y familias.

#### **F. Solicitud del gobierno de Venezuela al Banco**

- 1.29 El gobierno ha considerado de la más alta prioridad implantar el SPNA establecido en la LOPNA y, con base en este Sistema, expandir o apoyar la creación de nuevos programas de prevención, o mejorar los programas existentes que contribuyen a evitar la marginalidad infantil- juvenil y que respondan a la creciente necesidad de apoyo de las comunidades vulnerables. En este sentido, el gobierno ha solicitado al Banco el financiamiento parcial de un Programa para apoyar la implantación de esta nueva institucionalidad.
- 1.30 El gobierno prevé financiar con sus propios recursos la puesta en marcha de los nuevos órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público previstos en el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.

#### **G. Estrategia y fundamento de la participación del Banco**

- 1.31 La estrategia del Banco en el país enfatiza dos objetivos interrelacionados: i) el alivio a la pobreza y el desarrollo del capital humano; y ii) la participación de la sociedad civil y la mejoría de la prestación de servicios de las instituciones regionales y locales en las acciones del sector social. El Programa en estudio tiene

como objetivo básico apoyar acciones que cumplen con ambas premisas, centradas en este caso en la niñez y adolescencia.

- 1.32 En este sentido, el Programa ejercerá un papel de facilitador del proceso de implantación gradual del nuevo sistema por medio del apoyo: i) a los gobiernos nacional, estatales y municipales en la implantación y fortalecimiento de los principales órganos que constituyen el SPNA establecido en la LOPNA; ii) al proceso de transferencia de facultades y recursos del gobierno central a los estados y municipios a fin de acercar hacia el ámbito local la identificación, priorización y ejecución de proyectos en favor de la infancia y adolescencia; iii) al gobierno en la difusión de la importancia y los roles que en materia de protección de niños y adolescentes tiene la familia, la sociedad y el estado, en ese orden de importancia; y iv) al gobierno en el financiamiento de actividades y mecanismos necesarios para que los actuales recursos que el país ya viene ejecutando en materia de niños y adolescentes se realicen bajo los principios establecidos en la LOPNA.

#### **H. Experiencia del Banco**

- 1.33 En el área de la niñez y adolescencia, no hay experiencia previa del Banco en apoyar la implantación de una Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia. Sin embargo, hay experiencia en el fortalecimiento de instituciones y financiamiento de proyectos dirigidos a niños y adolescentes en situación de riesgo social<sup>5/</sup>.
- 1.34 Aunque no se cuenta con una evaluación global de las lecciones aprendidas de la preparación y ejecución de los programas de niñez y adolescencia en los diversos países, el análisis de su ejecución permite destacar tres aspectos que han sido tomados en cuenta en el diseño de esta operación: i) la inclusión de mecanismos para movilizar y fortalecer a las comunidades e instancias locales permite lograr un impacto importante en el nivel de compromiso y en el desarrollo de una capacidad sostenible de respuesta local a la problemática de la niñez y adolescencia; ii) la necesidad de un acompañamiento muy cercano por parte del Banco permite ir realizando ajustes a la realidad de las localidades participantes; y iii) la constitución de una fuerte capacidad operativa en la unidad ejecutora con perfiles profesionales apropiados permite conducir la complejidad de estos programas.

---

<sup>5/</sup> Algunos de los programas aprobados por el Banco en los últimos años y actualmente en ejecución son: i) 1996, Programa de Apoyo a Reformas Sociales para Niños y Adolescentes en el Estado de Ceara, Brazil (BR-0177); ii) 1997, el Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables, Argentina (AR-0161) y los Programas de Servicios Amplios para Niños Menores de 6 Años de Edad en Bolivia (BO-0130) y en Ecuador (EC-0157); y iii) 1998, Programa de Apoyo a Niños y Adolescentes en Riesgo Social en Argentina (AR-0198). El período de ejecución de estos programas varía entre 4 y 5 años.

## **II. EL PROGRAMA**

### **A. Objetivo**

- 2.1 El Programa tiene por objetivo apoyar al gobierno en los esfuerzos que viene realizando en garantizar los derechos de los niños y adolescentes desde su concepción hasta los 18 años. Este apoyo se realizará financiando la implantación de una nueva institucionalidad encargada de esta tarea. Los objetivos específicos son: i) apoyar la gestión de los órganos que conforman el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente (SPNA); ii) financiar proyectos que sean consistentes con esta nueva institucionalidad; y iii) apoyar el fortalecimiento de la capacidad de seguimiento y evaluación del SPNA, especialmente en el nivel central encargado de diseñar la política del sector.

### **B. Ambito de acción**

- 2.2 La implantación del SPNA será gradual en la medida en que se vaya creando la nueva institucionalidad a nivel de los estados y los municipios. De los 24 estados – incluyendo al Distrito Federal– y de los 333 municipios, se estima que el Programa comprenderá a 14 (58%) y 56 (17%), respectivamente. Los criterios de selección de los estados y municipios se detallan en el punto III.C.

### **C. Componentes**

- 2.3 El Programa incluye tres componentes: i) implantación del SPNA; ii) financiamiento de proyectos; y iii) monitoreo y evaluación del Programa.
- 2.4 Los componentes del Programa fueron definidos a partir de talleres de trabajo con representantes de las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionadas con el cuidado y protección de la infancia y adolescencia.

#### **1. Implantación del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente (US\$ 14.6 millones)**

- 2.5 Este componente incluye las actividades requeridas para apoyar a nivel nacional y en un conjunto de estados y municipios la implantación de los principales órganos del SPNA: el Consejo Nacional de Derechos (CND), los Consejos Estadales de Derechos (CEDs), los Consejos Municipales de Derechos (CMDs), los Consejos de Protección del Niño y Adolescente, las Defensorías del Niño y del Adolescente y las Entidades de Atención. Se considera para ello tres subcomponentes: i) Fortalecimiento Institucional; ii) Sistema de Información y iii) Comunicación, Mercadeo Social y Participación.

##### **a) Fortalecimiento institucional (US\$ 8.1 millones)**

- 2.6 El subcomponente apoyará la gestión de los órganos de dirección y administración del SPNA y de las gobernaciones y alcaldías participantes del Programa con el

objeto de asegurar la sostenibilidad institucional. A fin de apoyar el desarrollo de las capacidades técnicas y operativas de estos órganos, el Programa financiará las siguientes actividades: i) capacitación, ii) estudios, iii) asistencia técnica y iv) adquisición de equipos.

- 2.7 Se dictarán **cursos de capacitación** en: i) formulación y evaluación de proyectos a los Consejos de Derechos y de Protección, a los estados y a los municipios, ii) talleres sobre experiencias en la implantación del SPNA a los órganos del sistema y actores de la sociedad civil, iii) talleres de programación y presupuesto al personal de las áreas contables y administrativas (nivel nacional, estatal y municipal), iv) talleres de marco lógico a los Consejos de Derechos, Consejos de Protección y Entidades de Atención participantes del Programa, v) talleres de fortalecimiento y solución de conflictos familiares a los Consejos de Protección, Defensorías del Niño y del Adolescente y Entidades de Atención participantes del Programa, y vi) otros cursos cuya demanda se justifique y sean acordados con el Banco.
- 2.8 Se elaborarán **estudios** sobre i) evaluación de la eficiencia de los principales programas y proyectos en ejecución a nivel nacional dirigidos a la niñez y adolescencia (ver 1.14); ii) diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia a nivel de estados y municipios participantes del Programa; y iii) diagnóstico de niños y adolescentes de etnias indígenas.
- 2.9 Los resultados esperados del primer estudio incluirán: evaluar los modelos de atención y determinación de costos y cobertura por tipo de servicio, planes de acción para la mejora o adecuación de los servicios, construcción de indicadores de gestión, proceso de reorientación de recursos hacia otras actividades o entidades de atención. El segundo estudio identificará oferta de programas de atención y protección (redes de atención, entidades, proyectos, entre otros) y la demanda por servicios a nivel de los estados y municipios. El tercer estudio identificará y priorizará los servicios de protección y atención para las etnias que presenten un mayor grado de vulneración de sus derechos, respetando sus valores y cultura.<sup>6/</sup>
- 2.10 Los órganos administrativos del SPNA recibirán **asistencia técnica** en los niveles nacional, estatal y municipal. Para ello se contratarán firmas consultoras en cada estado para: i) dar soporte técnico a los Consejos de Derechos —estadales y municipales— en la ejecución del Programa, ii) asistir en materia de organización y métodos a los Consejos de Derechos y Consejos de Protección, iii) apoyar en la elaboración de planificación de corto y mediano plazo de programas de protección que considere metas físicas y recursos financieros y iv) elaborar una propuesta para la implantación del Fondo Nacional de Protección del Niño y Adolescente y establecer pautas y lineamientos para la creación y administración de los Fondos Estadales y Municipales de Protección del Niño y Adolescente (ver párrafo 1.27).
- 2.11 Se adquirirán **equipos** para apoyar las labores administrativas y de difusión de la nueva institucionalidad del SPNA —a nivel estatal y municipal. Se prevé la

---

<sup>6/</sup>

Las etnias con mayor población son: Wayuu, Warao, Pemón, Yanomami y Guajibo.

compra de los siguientes equipos: televisores, pantallas de proyección, videograbadoras, caballetes para rotafolio, fotocopadoras, faxes y retroproyectores.

- 2.12 Los términos de referencia de los cursos de capacitación, estudios y asistencia técnica, así como la relación de los equipos contenidos en este subcomponente se encuentran en el archivo técnico del Programa.

**b) Sistema de información (US\$ 3.3 millones)**

- 2.13 Este subcomponente está destinado a apoyar a los órganos administrativos del SPNA y en especial a los Consejos de Derechos –a nivel nacional, estatal y municipal– en el diseño e implantación de un sistema de información integrado.
- 2.14 Dicho sistema contempla: i) el desarrollo del sistema de información compuesto por cinco módulos, cuatro a nivel de los estados y municipios participantes con una agregación a nivel nacional, y un quinto módulo externo de nivel nacional; ii) dotación de la red de comunicaciones, equipamiento y software operativo y de oficina; y iii) capacitación al personal de los órganos administrativos en el manejo y mantenimiento de los sistemas a desarrollarse.
- 2.15 La información de los cuatro primeros módulos (casos de vulneración de derechos, registro de entidades de atención, situación de la niñez y adolescencia, y aspectos administrativos y financieros del Programa) será introducida a nivel municipal, almacenada y centralizada a nivel estatal y replicada a nivel nacional al Consejo Nacional de Derechos.
- 2.16 Con el quinto módulo, el Programa diseñará la adición de información estadística a la actual Encuesta de Hogares por Muestreo de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI). Esta adición incluirá datos sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en: salud, educación, vivienda y ambiente, entorno familiar y social, acceso a la justicia, registro de identidad, entre otros. La OCEI contempla en su presupuesto recursos para llevar a cabo la mencionada encuesta. Los términos de referencia para contratar el diseño mencionado se encuentran en el archivo técnico del Programa.
- 2.17 El sistema usará una interfase Web que brindará acceso a sus usuarios a través de la red Internet, con mecanismos de control y seguridad y acceso abierto en un contorno de administración centralizada y operación descentralizada. Para asegurar la integridad y confidencialidad de la información cada usuario tendrá acceso exclusivo a información previamente autorizada. Adicionalmente, cada usuario deberá ser previamente definido en un servidor y provisto con identificación y clave de acceso.
- 2.18 El subcomponente tiene tres actividades: i) el desarrollo e instalación del sistema de información; ii) la adquisición de equipos de computación, elementos de la red de comunicaciones y el software del sistema para la implantación de la red descentralizada; y iii) la capacitación al personal de los órganos administrativos involucrados en el manejo de sistemas y en el uso de las aplicaciones de cómputo.



- 2.19 Con respecto a la actividad de desarrollo e instalación del sistema de información, ésta comprende: i) un estudio detallado de los requerimientos informáticos; ii) la elaboración de las bases de licitación para la construcción del sistema; y iii) el diseño, desarrollo e implantación del sistema de información integrado. Los términos de referencia para el estudio indicado en el literal i) y los lineamientos de estrategia y arquitectura informática se encuentran en el archivo técnico del Programa.

**c) Comunicación, mercadeo social y participación (US\$ 3.2 millones)**

- 2.20 El subcomponente de comunicación, mercadeo social y participación financiará acciones que tienen como objetivo: i) apoyar la difusión, conocimiento y valoración del SPNA; ii) fomentar la creación de una cultura de derechos y deberes del niño y del adolescente, movilizándolo y estimulando la participación y la corresponsabilidad de los distintos actores del sistema: familia, sociedad y gobierno; iii) iniciar acciones que lleven a la adopción de buenas prácticas de crianza y de protección de niños y adolescentes; y iv) informar sobre el Programa. Las acciones de este subcomponente serán realizadas en dos niveles: a nivel nacional y en los estados y municipios focalizados por el Programa.
- 2.21 A **nivel nacional** se desarrollarán todas las acciones que sean relativas a la información y difusión de la LOPNA y de la institucionalidad vigente, así como de las buenas prácticas de crianza y de protección de niños y adolescentes. La estrategia a nivel nacional busca: i) incluir en la agenda nacional el tema de la infancia y adolescencia; ii) informar al país sobre las nuevas instituciones responsables de la protección de niños y adolescentes y con esto generar una demanda en las diversas comunidades para la implantación del SPNA a nivel local; y iii) internalizar en las familias y comunidades prácticas positivas de crianza y de protección de niños y adolescentes<sup>7/</sup>.
- 2.22 La estrategia de comunicación y mercadeo social a nivel nacional será implantada por medio de campañas televisivas, por radio y por medios impresos. Como complemento a las acciones financiadas, el Programa buscará establecer alianzas con los medios de comunicación que permitan multiplicar la difusión de los mensajes.
- 2.23 La estrategia a nivel nacional incluye el financiamiento de las siguientes actividades: i) diseño e implantación de una campaña de información sobre la LOPNA y la institucionalidad vigente; ii) diseño y producción de materiales para la difusión de la LOPNA y para estimular la participación de la sociedad organizada

---

<sup>7/</sup> Los temas de cultura de crianza a ser difundidos a nivel nacional deberán restringirse a aspectos básicos que afectan a la mayor parte de las familias venezolanas, independiente de diferencias regionales. Entre éstos se destacan los siguientes: a) importancia del desarrollo de los niños en los primeros años de vida y prácticas de estimulación temprana que pueden ser adoptadas por las familias; b) impacto negativo de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de los niños y en su vida adulta; c) aspectos de alimentación y salud fundamentales para el desarrollo de los niños y buenas prácticas que pueden ser incorporadas por las familias; y d) mecanismos para que las familias afronten problemas como el uso de drogas, consumo de alcohol y embarazo adolescente.

en la nueva institucionalidad; iii) creación de la imagen e identidad corporativa de los Consejos Nacional, Estadales y Municipales de Derechos, así como de las Defensorías y Consejos de Protección; iv) diseño y difusión de campañas sobre buenas prácticas de crianza y de protección de niños y adolescentes; v) herramientas básicas para la promoción, a ser distribuido a todas las municipalidades del país, de difusión de la LOPNA y de buenas prácticas de crianza y de protección de niños y adolescentes; vi) talleres de capacitación sobre el uso y difusión de las herramientas básicas para la promoción; y vii) paquete básico a ser distribuido a todos los Consejos de Derechos para charlas, presentaciones y talleres. Los términos de referencia para las actividades antes mencionadas, así como una muestra de las herramientas básicas y del paquete básico se encuentran en el archivo técnico del Programa.

- 2.24 A **nivel de estados y municipios** se desarrollarán acciones más específicas que: i) apoyen la implantación y la difusión de los principios de la LOPNA, ii) refuercen a nivel local la importancia de adoptar buenas prácticas de crianza y de protección de niños y adolescentes; e iii) informen sobre el Programa, en especial sobre sus características, criterios de focalización y de elegibilidad.
- 2.25 Se financiarán las siguientes actividades: i) talleres de presentación del Programa en los estados y municipios participantes; ii) cursos de capacitación sobre la LOPNA y especialmente del SPNA; iii) talleres de promoción de la participación en el SPNA; iv) sesiones de trabajo para la definición de planes municipales de mercadeo social sobre el SPNA y las buenas prácticas de crianza; y v) dos talleres anuales de educación de padres. Adicionalmente, se financiará para cada estado participante del Programa dos consultores a tiempo completo por un período de ocho meses. Estos consultores deberán apoyar la implantación de un proceso participativo en las municipalidades seleccionadas y el establecimiento de planes municipales que garanticen la sostenibilidad de las acciones del Programa. Los términos de referencia de estos consultores se encuentran en el archivo técnico del Programa.

## **2. Financiamiento de proyectos (US\$ 23 millones)**

- 2.26 A fin de estimular a los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad a adoptar la nueva institucionalidad, el Programa contempla apoyar el financiamiento de proyectos en los gobiernos locales y en las comunidades que hayan iniciado acciones de implantación del SPNA. Los criterios de elegibilidad de estados y municipios en que se financiarán estos proyectos se detallan en el capítulo III, sección C del presente informe.
- 2.27 Los recursos del Programa que se destinarán a financiar proyectos se distribuirán geográficamente utilizando como parámetro de asignación la población de cada estado en situación de pobreza extrema. Asimismo, el monto de los recursos que se asignará a cada municipio elegible, será proporcional a la población en situación de pobreza extrema residente en el respectivo municipio (ver párrafo 3.20).
- 2.28 El SPNA considera abordar una amplia gama de problemas relacionados con la infancia y adolescencia, lo que puede dar origen a una gran diversidad de proyectos

que podrían copar la actual capacidad institucional del nivel regional y municipal. Siendo el objetivo central del Programa apoyar técnicamente a la nueva institucionalidad, en especial la función planificadora de los estados y municipios, se ha considerado necesario limitar los tipos de proyectos elegibles a seis, considerados los de mayor importancia e impacto inmediato, tres en el área de atención y tres en el área de prevención.

- 2.29 En el **área de atención** se incluyen las siguientes líneas de inversión: i) desintoxicación ambulatoria de adicciones a drogas; ii) atención a la población sometida a medidas de protección, administrativas y a sanciones; y iii) atención a la población sometida a medidas provisionales y de excepción.
- 2.30 Se tiene previsto llevar a cabo a nivel de cada estado participante (14) un proyecto de desintoxicación de adicciones a drogas. Se calcula atender a 25 niños o jóvenes por mes mediante tratamiento ambulatorio que incluye además apoyo profesional para orientar y aconsejar a las familias de los niños y jóvenes bajo tratamiento. Con el PAI se están financiando los primeros proyectos en el área metropolitana de Caracas a través de ONGs con experiencia en este campo, tal es el caso de Hogar Nueva Vida, Renacer, Crea, entre otros.
- 2.31 Con los proyectos de protección en las áreas de embarazo adolescente, explotación laboral o sexual, maltrato infantil y abandono se atenderá a población cuyos derechos han sido vulnerados y requieren de apoyo profesional en las áreas legal, psicológica, de atención médica, o una combinación de ellas. En Venezuela hay diversas instituciones, en especial de la sociedad civil, con amplia experiencia en este campo.
- 2.32 En lo que respecta a la atención integral para población con medidas provisionales y de excepción, el Programa financiará el funcionamiento de Casas Abrigo. Dichas casas están destinadas a proteger a la población infantil que requiere ayuda profesional mientras un Tribunal de Protección se pronuncia sobre sus casos – abandono, maltrato, entre otros.
- 2.33 En el **área de prevención** serán elegibles las siguientes líneas de inversión: i) apoyo a la participación comunitaria en la vigilancia de derechos y deberes de la población; ii) apoyo al desarrollo de estructuras familiares; y iii) actividades formativas de prevención en vulneración de derechos. Los proyectos de prevención, manejados generalmente por ONGs, realizan actividades tendientes a evitar la drogadicción, el embarazo adolescente, la explotación sexual o laboral, entre otras, mediante actividades comunitarias involucrando especialmente a las familias.
- 2.34 El Programa financiará hasta el 90% del costo de los proyectos, con un máximo de US\$ 100,000. Los contratos deberán establecer la forma en que se integrará el aporte propio de la institución patrocinante del proyecto. El Programa prevé financiar aproximadamente 230 proyectos en los cuatro años de ejecución, con una inversión de US\$ 23 millones.

- 2.35 Para la preparación del Programa se financió el Plan de Acción Inmediata (PAI) (ver 1.16), cuya ejecución permitió confirmar importantes aspectos que se utilizaron para el diseño del Programa. Entre éstos, se pueden mencionar: i) la existencia de una demanda importante de las comunidades para este tipo de proyectos; ii) la existencia de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) con suficiente capacidad para diseñar y ejecutar proyectos acordes con la nueva institucionalidad; y iii) el sector privado aporta recursos complementarios en estos proyectos. Lo anterior permite prever que, una vez terminado el apoyo del Programa, la sostenibilidad de las actividades no constituirá un riesgo para la operación.
- 2.36 Los criterios de elegibilidad que deben cumplir los proyectos para participar del financiamiento del Programa son los siguientes: i) ser presentados por una organización social o comunitaria, pública o privada, acreditada ante el Consejo de Derechos correspondiente; ii) responder a los principios y disposiciones de la LOPNA; iii) el ámbito de acción del proyecto debe estar ubicado en los estados y municipios elegibles; iv) demostrar la existencia de una demanda no atendida; v) presentar un aporte propio, ajeno al financiamiento del Programa, de al menos el 10% del costo total del proyecto; y vi) demostrar la sostenibilidad del proyecto después de finalizado el financiamiento del Programa.

**CUADRO II-1**

<b>I. PROYECTOS DE ATENCIÓN</b>		
<b>Línea de Inversión</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Acciones financiables</b>
<b>1. Desintoxicación ambulatoria de adicciones a drogas.</b>	Atender el diagnóstico y terapias ambulatorias de desintoxicación de sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honorarios profesionales del equipo básico para la atención médica y psicoterapéutica, por un máximo de 1 año.</li> <li>Actividades de apoyo al desarrollo y crecimiento personal prescritas por profesionales especializados.</li> <li>Actividades educativas y formativas para promover la reinserción y el fortalecimiento familiar.</li> <li>Material de apoyo.</li> <li>Dotación de mobiliario básico.</li> <li>Acondicionamiento de la infraestructura.</li> </ul>
<b>2. Atención Integral a la población sometida a medidas administrativas y sanciones (Entidades de Atención).</b>	Prestar atención integral a la población que ha sido objeto de medidas administrativas y sanciones, garantizándole sus derechos, hasta que sea reinsertada en su grupo familiar /o en un grupo familiar sustituto. El tiempo de permanencia está limitado al cumplimiento de 18 años del beneficiario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honorarios profesionales del equipo básico para la atención psicosocial hasta por un año.</li> <li>Actividades de apoyo al crecimiento y desarrollo personal prescritas por profesionales especializados.</li> <li>Actividades educativas y formativas para promover la reinserción y el fortalecimiento familiar.</li> <li>Material de apoyo.</li> <li>Equipos para la capacitación.</li> <li>Dotación de mobiliario básico.</li> <li>Acondicionamiento de infraestructura.</li> </ul>
<b>3. Atención Integral para la población con medidas provisionales y de excepción: Casas Abrigo.</b>	Brindar atención integral a quienes están bajo medidas provisionales y excepcionales de protección, garantizándoles sus derechos. La permanencia de los beneficiarios está limitada a 30 días, después de lo cual el Tribunal de Protección debe dictaminar las medidas a tomar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honorarios profesionales del equipo básico para la atención psicosocial hasta por 1 año.</li> <li>Actividades de apoyo al desarrollo y crecimiento personal prescritas por personal especializado.</li> <li>Actividades para promover el restablecimiento de vínculos familiares y reinserción social.</li> <li>Material de apoyo.</li> <li>Dotación de mobiliario básico.</li> <li>Acondicionamiento de infraestructura.</li> </ul>
<b>II. PROYECTOS DE PREVENCIÓN</b>		
<b>4. Apoyo a la participación comunitaria.</b>	Fortalecer la participación comunitaria en la vigilancia de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honorarios del equipo profesional básico hasta por 1 año.</li> <li>Actividades para promover la participación familiar y comunitaria en la constitución de redes de prevención de derechos.</li> <li>Materiales de apoyo.</li> <li>Dotación de mobiliario básico.</li> <li>Acondicionamiento de infraestructura.</li> </ul>
<b>5. Apoyo al Desarrollo de Estructuras Familiares.</b>	Promover el restablecimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares y la reinserción de niños, niñas y adolescentes a su familia de origen o sustituta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honorarios del equipo profesional básico, hasta por 1 año.</li> <li>Actividades para promover la capacidad socializadora, protectora y formadora de la familia.</li> <li>Material de apoyo.</li> <li>Acondicionamiento de infraestructura.</li> </ul>
<b>6. Actividades formativas de prevención en vulneración de derechos.</b>	Promover actividades educativas y formativas, la prevención de embarazo adolescente, consumo de drogas, explotación sexual infantil, maltrato infantil y explotación laboral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honorarios del equipo profesional básico, hasta por 1 año.</li> <li>Actividades formativas de prevención en vulneración de derechos.</li> <li>Material de apoyo.</li> <li>Dotación de mobiliario básico.</li> <li>Acondicionamiento de infraestructura.</li> </ul>

### **3. Monitoreo y evaluación del Programa (US\$ 2 millones)**

- 2.37 Este componente está dirigido a diseñar e implantar un sistema de monitoreo y evaluación permanente que permita identificar y corregir de manera oportuna eventuales problemas durante la ejecución del Programa. Para ello, se financiará la contratación de una firma consultora independiente con comprobada experiencia en evaluaciones y auditorías de gestión, especialmente en el sector social, que efectuará la labor antes mencionada incluyendo el desarrollo de los indicadores de gestión y que verificará los alcances, resultados y potencialidades de las actividades que se vayan ejecutando.
- 2.38 Los informes de la firma serán bimensuales con una consolidación de resultados semestrales y un informe final al término de la consultoría. Todos los informes serán enviados a la UCP con copia al Banco.
- 2.39 Con el objeto de institucionalizar el sistema de monitoreo y evaluación, la firma consultora también diseñará y apoyará la implantación de una unidad de Monitoreo y Evaluación del sistema dependiente del CND, según lo establecido en la LOPNA<sup>8/</sup>. La firma además capacitará a los profesionales de esta unidad, la cual se encargará de continuar con la labor de monitoreo y evaluación en forma permanente una vez finalizada las labores de la firma. Los términos de referencia para la contratación de la firma se encuentran en el archivo técnico del Programa.
- 2.40 Se han identificado una serie de indicadores que se reflejan en el marco lógico, que se incluye como Anexo II-2, que permitirán hacer el seguimiento y evaluar el impacto del Programa. Algunos de los mencionados indicadores son: i) número de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos al final del Programa, ii) número ONGs y alcaldías con proyectos aprobados por el Programa ajustaron sus servicios a la LOPNA, iii) incremento anual de casos atendidos por defensorías; iv) número de estados y municipios participantes del Programa que tienen el SPNA operativo al final de la ejecución de la operación; v) número de funcionarios del CND capacitados en el sistema de monitoreo y evaluación; vi) número de funcionarios del SPNA que conocen la LOPNA; y vii) número de familias que han cambiado sus prácticas de crianza.

#### **D. Dimensionamiento**

- 2.41 El gobierno ha asumido el compromiso de poner en marcha en todo el país el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente (SPNA), como medio para atender a la problemática de la niñez y adolescencia. No obstante, ello requiere de capacidades institucionales y financieras que ameritan de una estrategia gradual de implantación del SPNA. En este contexto, la participación del Banco por medio del Programa cobra particular importancia en acompañar al país en el inicio de este proceso de implantación. El Programa ha buscado, en especial, lograr un equilibrio entre apoyar la creación de una nueva institucionalidad y el financiamiento de proyectos que se ejecutarán por medio de esta nueva institucionalidad.

---

<sup>8/</sup>

Artículo 137, literal g.

- 2.42 Para el dimensionamiento del Programa se han considerado tres aspectos: i) la demanda de los gobiernos locales por la implantación de la nueva institucionalidad prevista en el SPNA; ii) la capacidad institucional de los estados y municipios – actual y potencial– considerando el fortalecimiento institucional que el Programa ofrecerá en los próximos cuatro años; y iii) los costos asociados a las actividades del Programa a realizarse descentralizadamente.
- 2.43 Considerando que la LOPNA tiene sólo seis meses de vigencia, la instalación y funcionamiento del Consejo Nacional de Derechos y de Consejos de Derechos en 11 de los 24 estados del país<sup>9/</sup>, por una parte ratifica la prioridad que las autoridades dan al sector, y por otra, su convencimiento de que por medio de la nueva institucionalidad podrán dar pasos concretos para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Con las actividades previstas de Comunicación y Mercadeo Social se espera incrementar y consolidar la demanda y participación de más gobiernos locales, sociedad civil y familias.
- 2.44 Los estados y municipios participantes del Programa serán aquellos que, además de haber constituido y puesto en funcionamiento sus Consejos de Derechos, tengan capacidad institucional para asumir compromisos con el Programa y alberguen la mayor población en extrema pobreza (ver capítulo III, sección C). Debido al proceso de concentración de la extrema pobreza en las grandes ciudades<sup>10/</sup>, **los estados** con mayores recursos humanos y financieros son lo que a su vez tienen la mayor cantidad de población pobre<sup>11/</sup>. Con base en esta información, en los resultados de las distintas consultorías realizadas durante la preparación del Programa, y considerando el fortalecimiento de las capacidades institucionales a ser ofrecido a nivel nacional y local, se prevé que el ámbito del Programa abarcará 14 estados, de los cuales tres serían para el primer año. En el caso de **los municipios** comprendidos en los estados seleccionados, a fin de evitar la concentración de acciones del Programa en los más grandes, éstos se han clasificado en cuatro segmentos en función del tamaño de su población seleccionándose uno en cada segmento. Al interior de cada segmento se priorizará el municipio que tenga capacidad de ejecución y albergue la mayor cantidad de población en extrema pobreza. Por tanto, el Programa incluirá a cuatro municipios por cada uno de los 14 estados seleccionados, lo que significa considerar a 56 de los 333 municipios del país. En el primer año se estima 12 municipios comprendidos en los tres estados seleccionados.
- 2.45 El dimensionamiento consideró los mayores costos de ejecutar en forma descentralizada recursos del subcomponente de fortalecimiento institucional y del componente de financiamiento de proyectos de atención y prevención en el ámbito geográfico estimado del Programa: 14 estados y 56 municipios.

---

<sup>9/</sup> Se han creado Consejos Estadales de Derechos en Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcon, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo, Zulia y en el Distrito Federal Libertador.

<sup>10/</sup> OCEI – Población total en situación de pobreza y pobreza extrema.

<sup>11/</sup> Los estados con mayor población en extrema pobreza son Zulia, Lara y Miranda.

- 2.46 En cuanto al dimensionamiento del componente destinado a financiar proyectos de atención y prevención, éste constituye el principal incentivo para la consolidación de la institucionalidad en los 14 estados y 56 municipios que se estima participarán del Programa. Con el monto presupuestado, se prevé ejecutar 230 proyectos en cuatro años. Esto significa, financiar aproximadamente tres proyectos por estado y tres por municipio, lo cual constituye una cantidad modesta considerando los resultados de las experiencias pilotos financiadas por el Plan de Acciones Inmediatas (ver párrafo 1.16).

#### E. Costo y financiamiento

- 2.47 El costo total del Programa será de US\$ 50 millones. Su distribución por componentes y fuentes de financiamiento se muestran en el cuadro siguiente:

**CUADRO II-2**

<b>COSTOS DEL PROGRAMA</b> (en miles de US\$)				
<b>CATEGORIAS</b>	<b>BID</b>	<b>LOCAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1 ADMINISTRACION</b>	<b>200</b>	<b>4,250</b>	<b>4,450</b>	<b>9</b>
1.1 Unidad Coordinadora	0	3,350	3,350	
1.2 Administración FONVIS	0	900	900	
1.3 Evaluación final	200	0	200	
<b>2 COSTOS DIRECTOS</b>	<b>29,452</b>	<b>10,092</b>	<b>39,544</b>	<b>79</b>
2.1 Implantación del SPNA	9,052	5,492	14,544	29
2.1.1 Fortalecimiento Institucional	4,836	3,224	8,060	
2.1.2 Sistema de Información	2,278	976	3,254	
2.1.3 Comunicación, Mercadeo Social y Participación	1,938	1,292	3,230	
2.2 Financiamiento de Proyectos	18,400	4,600	23,000	46
2.3 Monitoreo y Evaluación	2,000	0	2,000	4
<b>3 SUBTOTAL</b>	<b>29,652</b>	<b>14,342</b>	<b>43,994</b>	<b>88</b>
<b>4 SIN ASIGNACION ESPECIFICA</b>	<b>48</b>	<b>1,983</b>	<b>2,031</b>	<b>4</b>
<b>5 COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>300</b>	<b>3,675</b>	<b>3,975</b>	<b>8</b>
3.1 Intereses	0	3,300	3,300	
3.2 Comisión de crédito	0	375	375	
3.3 Fondo de inspección y vigilancia	300		300	
<b>TOTAL</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>

- 2.48 El préstamo del Banco será de US\$ 30 millones que provendrán de los recursos de la facilidad unimonetaria en dólares del capital ordinario. Las asignaciones por componentes podrán ser revisadas anualmente y ajustadas a las necesidades y avances del Programa en sus diferentes capítulos. El aporte local financiará parcialmente los costos directos y casi la totalidad de la administración y costos financieros del Programa.



2.49 El financiamiento del Banco estará sujeto a las siguientes condiciones:

**CUADRO II-3**

	<b>CO/Facilidad Unimonetaria</b>
Plazo de amortización	25 años
Período de desembolso	4 años
Tipo de interés	Variable
Inspección y vigilancia	1% sobre el monto del préstamo
Comisión de crédito	0.75% anual sobre los saldos no desembolsados.
Moneda	Dólar Estadounidense

### **III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

#### **A. Prestatario y organismo ejecutor**

- 3.1 El prestatario será la República Bolivariana de Venezuela. La responsabilidad por la ejecución del Programa será del Ministerio de Salud y Desarrollo Social por medio de una Unidad Coordinadora del Programa (UCP), que se creará para tal efecto y que dependerá directamente del Viceministro de Desarrollo Social.
- 3.2 Los organismos que participarán directamente en la ejecución del Programa son: el Viceministerio de Desarrollo Social, la UCP, el Consejo Nacional de Derechos, los Consejos Estadales y Municipales de Derechos, las Gobernaciones, las Alcaldías y el Fondo de Inversión Social de Venezuela.

#### **B. Principales entidades participantes en la ejecución del Programa**

##### **1. El Viceministerio de Desarrollo Social**

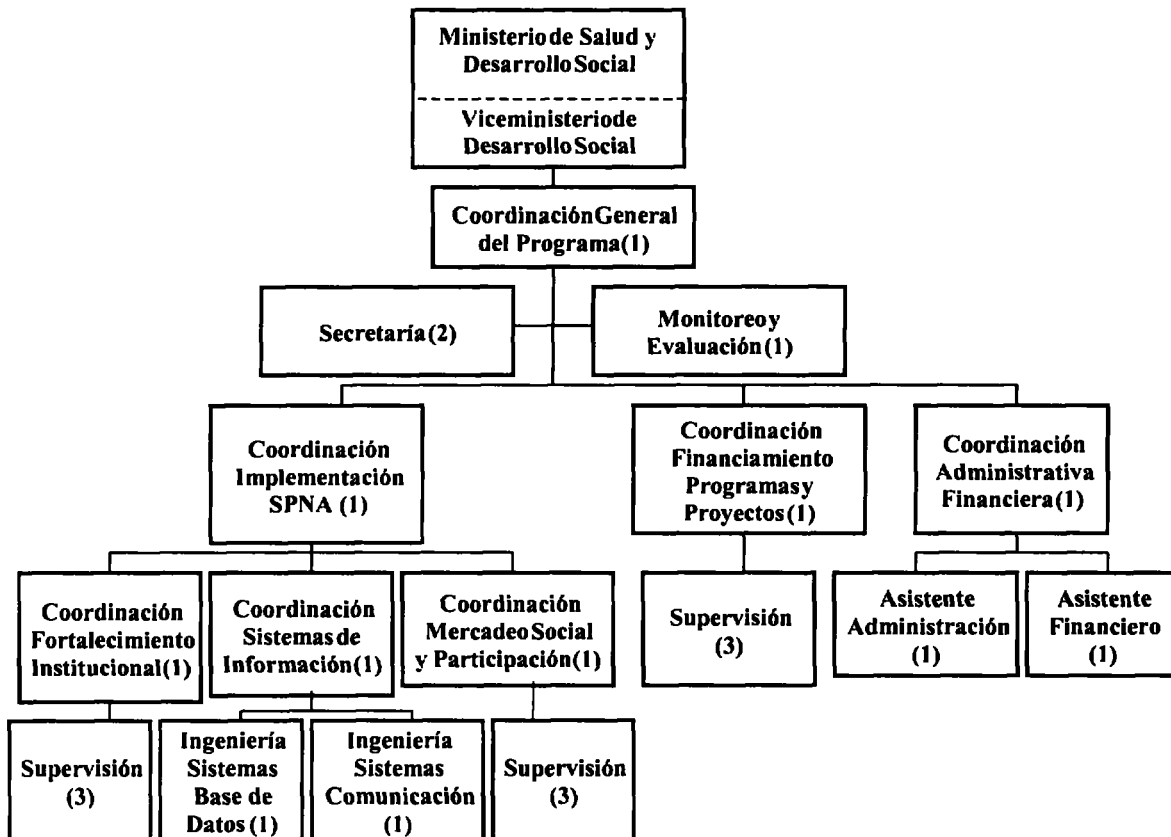
- 3.3 La responsabilidad de la ejecución del Programa será del Viceministro de Desarrollo Social, quien tendrá como función principal dirigir y supervisar la acción de la UCP. Asimismo, será de su responsabilidad realizar las gestiones para la aprobación del presupuesto del Programa, y mantener y coordinar las relaciones con las otras instituciones que participarán en la ejecución del Programa.
- 3.4 Será responsabilidad del Viceministro suscribir los convenios de coejecución con las gobernaciones y alcaldías que participarán del Programa y en los cuales se establecerán las obligaciones y responsabilidades de las partes. Asimismo, le corresponderá someter al Consejo Nacional de Derechos el Plan Operativo Anual del Programa que le preparará la UCP.

##### **2. Unidad Coordinadora del Programa (UCP)**

- 3.5 Las principales funciones de la UCP serán: i) programar la ejecución de los componentes del Programa; ii) acordar el Plan Operativo Anual del Programa con los estados y municipios participantes; iii) dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Convenio de Préstamo, Informe del Programa y demás documentos técnicos acordados con el Banco para la ejecución de la operación; iv) preparar el presupuesto y velar por la oportuna disponibilidad de recursos; v) presentar al Banco las solicitudes de desembolso y las correspondientes justificaciones de gastos e inversiones, consolidando la información financiera provista por los coejecutores; vi) mantener adecuados registros contables y financieros del Programa; y vii) presentar anualmente estados financieros auditados del Programa.
- 3.6 La UCP ha sido diseñada teniendo en consideración la estrategia de ejecución del Programa que, como se indicó, tendrá un alto grado de descentralización, y por tanto, su rol será básicamente de apoyo, supervisión y evaluación a las acciones de los estados y municipios. La UCP tendrá 24 personas, de las cuales 20 serán

profesionales y 4 serán personal de apoyo. En la figura III-1 se presenta el organigrama de la UCP.

**FIGURA III-1**  
**ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA**



- 3.7 Con el objeto de lograr y mantener el grado de calidad profesional y gerencial que requiere el Programa, los directivos y profesionales de la UCP deberán tener un perfil acorde con las funciones a desempeñar. Los términos de referencia para la contratación de los funcionarios de la UCP se encuentran en el archivo técnico del Programa.
- 3.8 Los nombramientos de las áreas directiva y profesional, así como el nivel de honorarios, deberán contar con la no objeción del Banco. Asimismo, los cambios al organigrama o a las funciones deberá realizarse de común acuerdo con el Banco. La creación de la UCP y la designación del coordinador general y de los coordinadores de los componentes será condición previa al primer desembolso.

### **3. Consejo Nacional de Derechos (CND)**

- 3.9 El CND es responsable de: i) formular la política, planes nacionales y lineamientos generales del SPNA, los cuales deberán ser observados por los Consejos Estadales y Municipales de Derechos; y ii) analizar y emitir su opinión sobre los Planes Operativos Anuales del Programa y sobre los informes periódicos de avance de los mismos.

### **4. Consejos Estadales y Municipales de Derechos, Gobernaciones y Alcaldías**

- 3.10 Los Consejos Estadales de Derechos (CEDs) y las gobernaciones de los estados participantes tendrán responsabilidad en: i) la identificación, en conjunto con la UCP, de las actividades prioritarias en el área de su jurisdicción; ii) formulación de los Planes Operativos Anuales del estado de su jurisdicción; iii) la suscripción con el Viceministerio de Desarrollo Social de los convenios de coejecución de las actividades que financiará el Programa.
- 3.11 Los CEDs serán la contraparte técnica del Programa a nivel estatal. En este aspecto, deberán promover, identificar y supervisar las actividades de implantación del SPNA, los proyectos de atención y prevención, y el monitoreo y seguimiento del Programa. Las gobernaciones apoyarán a los CEDs en sus labores administrativas y logísticas para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo será de su responsabilidad suscribir los contratos de bienes y servicios previstos en el Programa.
- 3.12 Los CEDs y gobernaciones, como coejecutores, serán también responsables de: i) remitir periódicamente a la UCP la información financiera necesaria a efectos de su consolidación a nivel de Programa y ii) establecer y mantener un adecuado sistema de registro contable y de archivo de la documentación de respaldo de los gastos e inversiones elegibles del Programa; dicha documentación deberá estar a disposición para revisión por parte de los funcionarios del Banco, y de los auditores externos del Programa.
- 3.13 Los Consejos Municipales de Derechos (CMDs) y los alcaldes, análogamente a los Consejos Estadales de Derechos y a los gobernadores respectivamente, desarrollarán lo mencionado en el párrafo anterior para el ámbito de su jurisdicción.

### **5. Fondo de Inversión Social de Venezuela (FONVIS)**

- 3.14 En Venezuela no existe en las unidades ejecutoras autonomía para el manejo de los recursos provenientes de operaciones de endeudamiento externo en los programas sociales, motivo por el cual el FONVIS cumple con esta función. Dicha institución ha sido utilizada en Programas con el Banco tales como: Capacitación Laboral de Jóvenes (805/OC-VE), Modernización y Fortalecimiento de la Educación Básica (779/OC-VE), Programa de Inversión Social (PROINSOL 658/OC-VE), entre otros.

- 3.15 Para efectos del Programa, el FONVIS será el organismo encargado de canalizar los recursos previamente asignados por el Viceministerio de Desarrollo Social. En tal sentido, el FONVIS no decidirá la asignación de recursos sino que únicamente realizará los pagos de las órdenes emitidas y mantendrá registros financieros separados y específicos relacionados con las transacciones del Programa. Asimismo, el FONVIS por delegación de las gobernaciones, alcaldías y la UCP podrá realizar las licitaciones de bienes y servicios. Para todo lo anterior, el Viceministerio de Desarrollo Social suscribirá un convenio con el FONVIS, el cual establecerá las condiciones para la administración delegada de los recursos de aporte local y externo. La suscripción de este convenio será condición previa al primer desembolso.

**C. Mecanismos de selección de los estados y municipios participantes del Programa**

- 3.16 La implantación del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente (SPNA) en los 24 estados y en los 333 municipios existentes en Venezuela será un proceso gradual, cuya puesta en marcha será apoyada por el Programa. Este proceso sólo podrá ir incorporando a los estados y municipios en la medida en que la capacidad y recursos de éstos les permitan ir construyendo la nueva institucionalidad dentro de sus jurisdicciones.
- 3.17 Tomando en cuenta lo antes mencionado, durante el primer año el Programa concentrará su acción en sólo tres estados, aumentando el número para los años siguientes de acuerdo a la experiencia que se vaya logrando durante la ejecución, hasta alcanzar la incorporación de 14 estados. Para seleccionar los tres estados que participaran el primer año, se han definido los siguientes criterios: i) haber establecido el Consejo Estatal de Derechos; ii) que en al menos el 10% de los municipios de su jurisdicción se hayan creado los Consejos Municipales de Derechos (CMDs); y iii) que dispongan de personal y recursos para ejecutar las acciones que se especificarán en el convenio de coejecución a suscribir con el Viceministerio de Desarrollo Social. De todos los estados que cumplan con estos criterios, se elegirán los tres que presenten la mayor población en extrema pobreza. Para el cumplimiento de estas condiciones se dará un plazo que permita a los estados promover la creación de los CMDs en los municipios de su jurisdicción. Será una condición previa al primer desembolso el haber firmado con cada uno de estos tres estados una Carta Compromiso de Inicio de Actividades, la cual deberá ser suscrita por el gobernador, el Viceministro de Desarrollo Social y la UCP. La Carta Compromiso incluirá una estimación de los costos, fuentes de financiamiento y una enumeración y plazo de ejecución de las actividades.
- 3.18 Con respecto a los municipios, el Programa financiará actividades en aquellos que estén bajo la jurisdicción de los estados declarados elegibles. Por otra parte, para efectos del Programa, los municipios se han agrupado en cuatro categorías en función de su población: i) menos de 50,000 habitantes; ii) entre 50,000 y 100,000 habitantes; iii) entre 100,000 y 250,000 habitantes; y iv) más de 250,000

habitantes<sup>12/</sup>. Para seleccionar los municipios del Programa y con el objeto de evitar la concentración de la inversión en las grandes ciudades, se seleccionará en cada uno de los estados elegibles un municipio para cada una de estas categorías<sup>13/</sup>.

- 3.19 Los criterios para determinar los municipios elegibles serán: i) haber establecido el CMD y ii) contar con el personal y los recursos para llevar adelante las acciones que se especificarán en el convenio de coejecución a suscribir con el Viceministerio de Desarrollo Social. De todos los municipios que cumplan con estas condiciones, se seleccionará por cada categoría el que tenga la mayor población en situación de pobreza extrema.
- 3.20 Los recursos del Programa serán distribuidos sobre la base de un tope máximo por cada ámbito regional participante. El cálculo de dicho tope considera la distribución equitativa entre los 14 estados estimados a participar en el Programa y la población en extrema pobreza que reside en cada uno de ellos. El monto máximo asignado a cada estado permite financiar en todos ellos las distintas actividades previstas, evitando la concentración de los recursos en las regiones más grandes y que desde el inicio participarán en el Programa. La metodología detallada se incluye como apéndice del Reglamento Operativo del Programa.
- 3.21 Para el segundo año se prevé la incorporación de 5 estados y 20 municipios y para el tercero, 6 estados y 24 municipios. Tanto los estados como los municipios se seleccionarán sobre la base de los criterios antes mencionados.

#### **D. Esquema general de ejecución**

- 3.22 En el **primer año**, el Programa prevé comenzar las actividades a nivel nacional y preparar las labores de arranque en los primeros tres estados y 12 municipios participantes.
- 3.23 A nivel nacional, el Programa iniciará las acciones del subcomponente de Comunicación, Mercadeo Social y Participación, en especial informar y difundir el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente (SPNA) contenido en la LOPNA, consolidar el funcionamiento de los Consejos Estadales y Municipales de Derechos y promover la creación de los Consejos de Protección.
- 3.24 Con los recursos del subcomponente de Fortalecimiento Institucional se prevé la contratación y ejecución del estudio sobre la evaluación de la eficiencia de los principales programas y proyectos en ejecución a nivel nacional dirigidos a la niñez y adolescencia (ver párrafos 2.8 y 2.9). En cuanto al subcomponente de Sistemas de Información, se ejecutarán las acciones relativas al diseño del módulo

---

<sup>12/</sup> La clasificación de los municipios en cuatro categorías se basó en el estudio Formulación de Tipología Municipal (1997) realizado por la firma consultora Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, la cual actualizó dicho estudio y formó parte del equipo de preparación del Programa.

<sup>13/</sup> En el caso de que un estado no presente municipios para todas las categorías, igualmente se seleccionarán cuatro municipios, uno en cada categoría existente y los cupos sobrantes se asignarán en municipios donde se concentre el mayor número de familias en pobreza extrema.

de información estadística sobre la situación de la niñez y adolescencia, el cual se adicionaría a la actual encuesta de Hogares por Muestreo de la OCEI, y la determinación de los requerimientos informáticos en detalle del sistema de información (ver párrafos 2.16 y 2.19).

- 3.25 A nivel de los estados y municipios, a fines del año 2000 se seleccionarán los gobiernos locales participantes en función de los criterios de elegibilidad detallados en la sección anterior. El Viceministerio de Desarrollo Social viene llevando a cabo la selección y contratación de una firma consultora encargada de diseñar en los primeros 2 meses del año las pautas de la estructura organizacional, requerimientos mínimos de equipamiento y personal que, en función de sus dimensiones y capacidades, deberán aportar los tres estados y 12 municipios seleccionados para el primer año. Esta contratación será financiada con recursos del Programa de Apoyo a las Iniciativas de la Sociedad Civil (PAIS 1045/OC-VE).
- 3.26 Con base en este estudio se acordarán los convenios de coejecución entre el Programa, representado por la UCP y el CND, y los Consejos de Derechos, gobernadores y alcaldes de los tres estados y 12 municipios participantes. Estos convenios, que se prevé estarán en vigencia a fines del primer trimestre del 2001, establecerán las actividades que se financiarán con recursos del Programa y los compromisos adquiridos por las entidades estatales y municipales. La UCP consolidará esta información con las actividades de alcance nacional que vaya realizando.
- 3.27 A partir del **segundo año**, la UCP elaborará el plan que incluye las diversas actividades y su cronograma que por su naturaleza serán ejecutadas centralizadamente. En relación con los estados y municipios que se vayan incorporando al Programa, el primer paso será la identificación de sus actividades prioritarias. Con base en estas actividades y la capacidad institucional del estado o municipio, se elaborará para cada uno de ellos el POA con cuyos antecedentes se suscribirá el respectivo convenio de coejecución. Finalmente, la UCP consolidará los POA de los estados y municipios, junto con las actividades de carácter nacional y elaborará el Plan Operativo Anual del Programa.
- 3.28 Para apoyar la gestión técnica, administrativa y operativa de los CEDs y los CMDs y, en especial, para asesorar en la marcha de los componentes del Programa, se contratará por un año a una firma consultora por cada estado.
- 3.29 Dada la naturaleza innovativa del Programa, se ha previsto contratar a una firma independiente para que realice el seguimiento y evaluación permanente de las acciones del Programa y proponga los ajustes pertinentes.

#### **E. Ejecución de los componentes**

##### **1. De la implantación del SPNA**

- 3.30 Las consultorías de capacitación y asistencia técnica que se contratarán para los órganos del nivel central serán realizadas por la UCP. Aquellas que deban llevarse

a efecto en los estados y municipios serán seleccionadas por los Consejos Estadales y Municipales de Derechos, con apoyo de la gobernaciones y alcaldías, siendo estos últimos los que efectuarán las contrataciones. Los estudios previstos se ejecutarán por firmas consultoras, cuyo proceso será llevado por la UCP dado el alcance nacional de los mismos. Las compras de equipos de reproducción, video, audio y mobiliario se ejecutará de modo centralizado por la UCP.

- 3.31 El subcomponente de Sistemas de Información considera la contratación de consultorías individuales para el estudio de los requerimientos informáticos y la elaboración de bases de licitación para la construcción del sistema. Asimismo, prevé la contratación de una firma consultora para el diseño, desarrollo e implantación del sistema de información integrado. Los procesos de contratación de las consultorías y la adquisición de equipos informáticos serán llevados a cabo por la UCP a fin de estructurar un sistema único aplicable en todas las entidades. La capacitación se contratará a nivel central para los técnicos encargados de la administración del sistema nacional y en forma descentralizada para los usuarios y personal encargados de ingresar la información a nivel estatal y municipal.
- 3.32 El subcomponente de Comunicación, Mercadeo Social y Participación se llevará a efecto por consultorías o empresas de comunicación especializadas en el diseño y producción de materiales. Las actividades de diseño y producción de materiales serán contratadas por la UCP. Para los cursos y talleres en los estados y municipios, estos seleccionarán y contratarán empresas locales.

## **2. De los proyectos**

- 3.33 Los proyectos deben responder a las prioridades establecidas en el convenio de coejecución entre la UCP, el Consejo de Derechos y la gobernación o alcaldía según corresponda, y formar parte del plan operativo anual del estado o municipio.
- 3.34 Los proyectos podrán ser elaborados y ejecutados por organizaciones sociales o comunitarias acreditadas en el Consejo de Derechos correspondiente. Estos proyectos, de acuerdo a su ámbito geográfico, deberán ser presentados al respectivo Consejo de Derechos para su evaluación y aprobación. Una vez aprobados, se suscribirá un contrato entre el Consejo de Derechos, la gobernación o alcaldía y la organización social ejecutora.
- 3.35 Una vez iniciada la ejecución del proyecto, las gobernaciones y alcaldías emitirán órdenes de pago a favor de los agentes ejecutores de los proyectos. Estas órdenes serán enviadas al FONVIS quien directamente las pagará.

## **3. Del monitoreo y evaluación del Programa**

- 3.36 Además del seguimiento que hace el Banco y la UCP, se ha previsto la participación de una firma independiente para efectuar un seguimiento y evaluación permanente de la gestión y desarrollo del Programa.
- 3.37 Será condición previa al primer desembolso haber iniciado el proceso de contratación de la firma consultora con la publicación del llamado a concurso. La



contratación deberá estar terminada antes de comprometer el 10% del financiamiento. Los informes de seguimiento y las recomendaciones resultado de la evaluación serán revisados por la UCP y el Banco en las reuniones periódicas de seguimiento.

**F. Administración financiera de los recursos**

- 3.38 Los recursos para la ejecución del Programa serán asignados en la Ley de Presupuesto Nacional, tanto de aporte externo como de la contrapartida local, en función del Plan Operativo Anual presentado por el Viceministerio de Desarrollo Social. Los recursos necesarios para el primer año están contemplados en la Ley de Presupuesto del año 2001.
- 3.39 Con el propósito de manejar los fondos provenientes de la cuenta del préstamo del Banco, la UCP gestionará ante el Ministerio de Finanzas y por instrucción del Ministro de Salud y Desarrollo Social, la apertura de "Cuentas Especiales" en moneda local y divisas en el Banco Central de Venezuela. La apertura de estas cuentas constituye una condición previa para el primer desembolso.
- 3.40 El FONVIS, según lo estipule el convenio a suscribir con el Viceministerio de Desarrollo Social, deberá abrir un concurso para la apertura de un fideicomiso en un banco de reconocida solvencia.
- 3.41 Los pagos por los servicios de consultorías y adquisición de bienes serán efectuados por el FONVIS, previa solicitud de la UCP o de los estados y municipios, de acuerdo a lo establecido en el cronograma trimestral de aplicación de recursos, que deberá ser elaborado por la UCP.

**G. Reglamento Operativo**

- 3.42 La ejecución del Programa se regirá por el Reglamento Operativo, el cual contiene las normas, procedimientos y regulaciones necesarias para ejecutar cada uno de los componentes que integran el Programa, así como las funciones y obligaciones del organismo executor y de los subejecutores. Este Reglamento está compuesto por un cuerpo principal y apéndices referidos a procedimientos, criterios de elegibilidad, condiciones de financiamiento, mecanismos de ejecución específicos para cada actividad, condiciones de sostenibilidad, procedimientos para el seguimiento y evaluación, entre otros. Los aspectos más relevantes se refieren a los criterios de elegibilidad de estados y municipios, los procedimientos para asignación de recursos por estado y por municipio, los tipos de proyectos elegibles para su financiamiento, los procedimientos de pago, las características de los convenios de coejecución, tanto a nivel de estados como de municipios, entre otros. La propuesta de Reglamento Operativo se encuentra en el archivo técnico del Programa. Su puesta en vigencia será condición previa al primer desembolso.

**H. Procedimientos de contratación**

- 3.43 Para la adquisición de bienes relacionados con el Programa, financiados total o parcialmente con recursos del préstamo, deberá utilizarse el sistema de licitación

pública internacional en todos los casos en que el valor de las adquisiciones exceda el equivalente de US\$ 350,000. Las licitaciones se sujetarán a los procedimientos que constarán como Anexo B del Contrato de Préstamo. Para los bienes adquiridos totalmente con recursos de la contrapartida local se aplicará la legislación nacional. El Programa no contempla la realización de obras civiles.

- 3.44 La contratación de servicios de consultoría se hará de acuerdo a los procedimientos del Banco, que constarán como Anexo C del Contrato de Préstamo.
- 3.45 En el Anexo III-1 se detalla el calendario de adquisiciones de bienes y servicios que se efectuarán con cargo a los recursos del Programa.

**I. Período de ejecución y calendario de desembolsos**

- 3.46 El Programa se ejecutará y se desembolsará en cuatro años. Se estima que el plazo para comprometer los recursos del financiamiento será de tres años y medio contados desde la entrada en vigencia del contrato de préstamo. A continuación se presenta un cuadro con el cronograma de desembolsos sin incluir los montos sin asignación específica y los costos financieros.

**CUADRO III-1**

En millones de US\$

	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Total</b>
<b>Banco</b>	4.4	8.9	10.4	5.9	29.6
<b>Local</b>	2.1	4.3	5.0	2.9	14.3
<b>Total</b>	6.5	13.2	15.4	8.8	43.9
<b>En porcentaje</b>	15%	30%	35%	20%	100%

**J. Reconocimiento de gastos**

- 3.47 Se podrán reconocer gastos previos a la fecha de aprobación del préstamo por el Directorio, para la adquisición de bienes y servicios previstos en el Programa, para ser reembolsados con recursos de la contrapartida nacional hasta por el equivalente de US\$ 500,000. Dichos gastos deben haber sido incurridos siguiendo procedimientos sustancialmente análogos a los establecidos por el Banco, y deberán haberse llevado a cabo durante un plazo máximo de 18 meses antes de la fecha de aprobación de la operación por el Directorio.

**K. Auditoría externa**

- 3.48 Los estados financieros del Programa y los de la UCP deberán ser dictaminados por una firma de auditores independientes aceptable al Banco. Dichos estados

deberán ser presentados dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio presupuestario del gobierno (31 de diciembre) durante todo el período de ejecución del Programa, comenzando con la auditoría correspondiente al año calendario 2001, en conformidad con los términos de referencia aceptables para el Banco.

**L. Seguimiento, evaluaciones e informes de progreso**

**1. Reuniones y evaluaciones de seguimiento**

- 3.49 La UCP y el Banco realizarán reuniones de seguimiento en las cuales se revisará el funcionamiento del Programa tanto en lo institucional como en lo operativo. Durante el primer año se realizarán dos reuniones y una en cada uno de los años dos, tres y cuatro. Las fechas serán acordadas entre el Banco y la UCP. En estas reuniones se revisará la marcha de la implantación de la LOPNA, el papel de la nueva institucionalidad, los consejos, gobernaciones y alcaldías, el esquema de ejecución descentralizado, y el menú de opciones de los proyectos. Si corresponde de acuerdo a los resultados de la revisión, se adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la buena marcha del Programa.

**2. Evaluación final**

- 3.50 Al teminar de comprometer los recursos del Programa, se contratará una firma independiente para realizar una evaluación final del Programa. Esta evaluación tendrá como objetivo medir tanto el impacto global del Programa como el de las diferentes actividades financiadas por el mismo. En especial se medirá la efectividad del traspaso de conocimientos y metodologías de las distintas consultorías de apoyo que se contemplan en el Programa.
- 3.51 Para poder realizar esta evaluación, los términos de referencia para el componente de monitoreo y evaluación concurrente que se contempla en el Programa, incluyen la captura periódica de los indicadores de gestión y de impacto contemplados en la línea de base, así como de otros antecedentes que se requieren para la evaluación final del Programa.
- 3.52 Los resultados de esta evaluación serán de gran utilidad para la continuación del proceso de implantación del Sistema de Protección de los Niños y los Adolescentes una vez concluido el Programa.

**3. Informes de progreso**

- 3.53 La UCP presentará al Banco durante la ejecución del Programa, informes semestrales de progreso con un detalle apropiado de las acciones iniciadas por el Programa y los procedimientos aplicados en la utilización de los recursos del financiamiento, así como los informes y recomendaciones presentados por la firma independiente que realizará el monitoreo y evaluación permanente del Programa.

**M. Evaluación ex-post del Programa**

- 3.54 No se contempla ejecutar una evaluación ex-post del Programa. Sin embargo, la información que se recopile durante las reuniones anuales de seguimiento así como en la evaluación final y en la evaluación permanente, incluirán indicadores y parámetros que permitirán realizar una evaluación ex-post si el Banco decide llevarla a cabo.

## **IV. VIABILIDAD Y RIESGOS**

### **A. Viabilidad**

- 4.1 Con anterioridad a la puesta en vigencia de la LOPNA, no existía un marco legal e institucional que planificara, regulara y evaluara los programas –público y privado– de atención y protección a la infancia y adolescencia. Esto generó que la respuesta a la problemática fuese débil y casi inexistentes en muchos lugares del país. Todo esto llevó al diseño de una profunda reforma sobre la materia que se reflejó con la promulgación de la LOPNA.
- 4.2 El Programa está enmarcado en el interés mostrado por las autoridades en los distintos niveles de gobierno en poner en práctica este nuevo sistema. Es así que desde el 1 de abril del 2000 –fecha que entró en vigencia la LOPNA– ya viene funcionando el CND, se han implantado Consejos de Derechos en diez estados y se espera tres más antes de fin de año. Esta nueva institucionalidad requiere ser apoyada en sus tareas. Por otro lado, en la sociedad civil se viene gestando un conjunto de iniciativas y proyectos de protección y atención que responden a la nueva institucionalidad.
- 4.3 La propuesta metodológica y conceptualización del Programa fue validada con talleres y seminarios en los que participaron las distintas entidades públicas y privadas que laboran en el ámbito de la infancia y adolescencia, así como la asistencia de expertos nacionales e internacionales.
- 4.4 En los últimos años Venezuela ha destinado en forma sostenida aproximadamente US\$ 600 millones anuales en diversos programas de atención y cuidado a la niñez y adolescencia (ver párrafo 1.14). Adicionalmente, la prioridad manifestada por las autoridades en el sector y la rápida respuesta en establecer la nueva institucionalidad prevista en la LOPNA, permite mostrar la viabilidad financiera de la operación en lo que se refiere a la disponibilidad de los recursos para la contrapartida local del Programa (ver párrafo 3.46) y para los costos recurrentes. Por otra parte, el Programa aumentará la eficiencia en el uso de los recursos que el país viene gastando en niñez y adolescencia, por lo que no se prevé problemas para que, una vez terminado el financiamiento del Banco, los costos derivados del mismo sean asumidos por el país, ya que éstos son menores al 1% del actual presupuesto del sector.
- 4.5 Como consecuencia de los nuevos mecanismos descentralizados que apoyará el Programa para distribuir los recursos entre las entidades estatales, municipales y de la sociedad civil, se espera una fuerte participación comunitaria que contribuirá a generar presión social para mantener la continuidad de las inversiones en programas de protección y atención.

**B. Análisis de los beneficiarios**

- 4.6 El Programa propuesto es de carácter social conforme a lo estipulado en el documento de la Octava Reposición. Además, cumple con la característica de estar focalizado hacia los sectores de bajos ingresos. El Programa especifica indicadores de desempeño para medir la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la equidad social (ver Anexo II-2).
- 4.7 El Programa está calificado automáticamente PTI porque apoya al sector de la niñez y adolescencia. Además se priorizará los estados que albergan la mayor pobreza extrema en el país.

**C. Análisis ambiental**

- 4.8 El Programa apoya básicamente acciones de reformas administrativas y legales y por lo tanto no tendrá impactos ambientales. Las obras de rehabilitación son en general mínimas y en ellas se tendrá en cuenta los elementos necesarios para evitar o mitigar los posibles impactos al medio ambiente.

**D. Beneficios**

- 4.9 La LOPNA cuya implantación se apoya con el Programa, no sólo considera el respeto a los derechos de los niños y adolescentes, sino que crea los organismos e instrumentos para que éstos sean efectivamente ejercidos con la participación directa de las comunidades y las familias.
- 4.10 Con las actividades previstas en el Programa se espera contribuir a incrementar en los tres niveles de gobierno su capacidad de identificación de prioridades, planeamiento y aumento de la eficiencia en el uso de los recursos que actualmente destina el país a la problemática de la niñez y adolescencia.
- 4.11 Con la mejora en la perspectiva de vida de los niños y adolescentes se logrará que, en su vida adulta, tengan mayores oportunidades al mercado de trabajo, disminuir las posibilidades de entrar en conflicto con la ley y alcanzar una mayor integración en la vida cotidiana. Además, la mejora en la calidad de vida de un niño o adolescente y el respeto de sus derechos producirá ahorros futuros en la sociedad.
- 4.12 La participación directa de los gobiernos locales junto con la comunidad en la identificación y ejecución de estas acciones es un elemento de gran poder motivador, lo que permite un resultado social altamente positivo y con elementos de apropiación del Programa por los actores relevantes del proceso.
- 4.13 La ejecución de aproximadamente 230 proyectos permitirá generar capacidades para atender o prevenir la vulneración de los derechos de niños y adolescente, en especial de aquellos provenientes de familias pobres. Asimismo, el cofinanciamiento de los proyectos a nivel local con la participación de sus autoridades, y en algunos casos de entidades del sector privado, permite establecer un mayor nivel de compromiso para su mantenimiento al término del Programa.

**E. Riesgos**

- 4.14 Considerando que no existen experiencias previas con operaciones de implantación de un marco legal en materia de niñez y adolescencia, un aspecto central y de riesgo para la ejecución del Programa es la coordinación inter-institucional y al interior de los niveles de gobierno. La efectiva programación de las actividades en coordinación entre Consejos de Derechos, gobernaciones y alcaldías, los mecanismos de ejecución previstos para cada componente, y en especial el monitoreo y evaluación en forma permanente del Programa, reducirán este riesgo.
- 4.15 La implantación del SPNA requiere de una capacidad institucional elevada. Para reducir el riesgo se fortalecerá con el Programa una masa crítica de recursos humanos de los diferentes niveles de gobierno por medio de actividades de capacitación, asistencia técnica y asesoramiento en materia de seguimiento y monitoreo.

**MARCO LOGICO**  
**PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA**

<b>Narrativo</b>	<b>Indicadores de Logro</b>	<b>Medios de Verificación</b>	<b>Supuestos Importantes</b>
			<b>Sustentabilidad</b>
Reducir el número de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de sus derechos	1 El número de niños, niñas y adolescentes registrados en situación de vulneración de los derechos es al final del Programa en los municipios beneficiarios menor que el registrado en el año inicial de ejecución.	1.1.1 Informe diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia a nivel central, estatal y municipal. OCEI, Informes diagnósticos anuales por estados y municipios. Informe final de monitoreo y evaluación del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El SPNA se mantiene después de terminado el Programa como prioridad en los planes de programación e inversión nacional.</li> <li>Las comunidades participan activamente en el sistema nacional de protección.</li> </ul>
			<b>Propósito a Fin</b>
Estado de LOPNA.	1.1 100% de ONGs y alcaldías con proyectos aprobados por el Programa, ajustaron sus servicios según los principios de la LOPNA a más tardar al final del cuarto año de ejecución.	1.1.1 Informes de monitoreo y evaluación del Programa.	
	1.2 Recursos asignados para la protección de niños niñas y adolescentes en los estados y municipios participantes del Programa ajustados a las prioridades de la LOPNA.	1.2.1 Informes anuales de presupuesto de los Consejos de Derechos presentados al Programa.	
	1.3 Incremento de por lo menos el 20% anual de casos atendidos por las defensorías de los municipios focalizados por el Programa, entre el inicio y el final del cuarto año de ejecución del Programa.	1.3.1 Registro de casos atendidos en la defensorías, consejos municipales de protección. Informes anuales y final de monitoreo y evaluación del Programa.	
			<b>Componentes a Propósito</b>
Protección y atención divulgada en los países y en las comunidades.	1.1 Estructura organizativa, funcionales, de cargo, procedimientos, mecanismo y reglamento de funcionamiento del Fondo Nacional de Protección elaborado e implantado al final del segundo año de ejecución del Programa	1.1.1 Manuales organizativos, administrativo y reglamento del Fondo Nacional de Protección elaborado e implantado. 1.1.2 Informe anual de monitoreo y evaluación del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El CND ejerce su función rectora del SNPA a nivel nacional coordinando las acciones de los CED y los CM</li> </ul>



Narrativo	Indicadores de Logro	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
	1.2 Estados y Municipios participantes del Programa tienen diseñadas, implantadas y funcionando la estructura organizativa, la funcional, la de cargos, y los procedimientos y reglamentos internos de los Consejos de Derechos y de los Fondos de Protección Estatal y Municipal al final del cuarto año de ejecución del Programa.	1.2.1 Manuales organizativos, administrativo y reglamento de los CED, CMD y de los fondos de protección implantado. 1.2.2 Informe Anual y final de monitoreo del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los Consejos de Derechos estatales y municipales se reúnen periódicamente y toman decisiones con base a la información suministrada en los diagnósticos, estudios e informes de seguimiento y evaluación</li> </ul>
	1.3 El CND, los CED y los CMD tienen implantados y funcionando eficientemente al final de la ejecución el sistema de planificación física –financiera	1.3.1 Planes operativos anuales y documento de presupuesto Programa anuales de CND, CED y CMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>El 70% del personal capacitado permanece al menos dos años en el sistema de protección a nivel central, estadual y municipal.</li> </ul>
	1.4 Los estados y municipios participantes del Programa tienen el SPNA operativo al final del Programa.	1.4.1 Informe final de evaluación del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos 14 gobernadores y 50 alcaldes establecen como prioridad de su gestión la instrumentación de la LOPNA</li> </ul>
	1.5 Estudio a nivel nacional de evaluación de los programas de atención y prevención de vulneración de los derechos del niño y adolescente concluido al final del segundo año de ejecución.	1.5.1 Documento del estudio: evaluación de los programas a nivel nacional aprobado. Informe anual de monitoreo.	
	1.6 14 estudios estatales sobre la situación de la niñez y la adolescencia, registro de entidades, evaluación de programas y proyectos realizados a nivel de estados y municipios concluidos al final del Programa.	1.6.1 Informes estadísticos anuales sobre la situación de la niñez y la adolescencia, sobre programas y proyectos a nivel de los estados y municipios participantes del Programa. Informe anual de monitoreo del Programa.	
	1.7 Estudio a nivel nacional sobre programas y servicios de protección para las comunidades étnicas a nivel nacional diseñado y acordado con el CND en el segundo año de ejecución del Programa.	1.7.1 Informe del estudio aprobado.	
	1.8 70 documentos de políticas y planes estatales y municipales para la protección de la niñez y adolescencia, formulados, aprobados y ejecutados al final de la ejecución de la operación.	1.8.1 Documentos de política y planes para la protección de la niñez y la adolescencia a nivel de los estados y municipios publicados anualmente.	
	1.9 400 funcionarios de las gobernaciones y alcaldías capacitados en programación y presupuesto al final del Programa.	1.9.1 Registro e informe anual de capacitación aprobado por la UCP	

Narrativo	Indicadores de Logro	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
	1.10 3,050 personas a nivel estatal y municipal que laboran en programas de atención y prevención dirigidos a la población meta, capacitadas en cursos sobre fortalecimiento a las familias al final del cuarto año del Programa.	1.10.1 Registro e informe de evaluación anual de capacitación aprobado por la UCP	
	1.11 3,050 personas a nivel estatal y municipal capacitadas en marco lógico al final del cuarto año del Programa.	1.11.1 Registro e informe de evaluación anual de capacitación aprobado por la UCP	
	1.12 400 personas a nivel nacional, estatal y municipal capacitadas en formulación y evaluación de proyectos al final del Programa.	1.12.1 Registro e informe de evaluación anual de capacitación aprobado por la UCP	
	1.13 70% de los funcionarios de las gobernaciones y alcaldías participantes del Programa que formulan proyectos con el uso de la metodología establecidas en los cursos de formulación de proyectos ejecutados en el Programa	1.13.1 Informes anuales de monitoreo y evaluación del Programa	
	1.14 100% del personal encargado del presupuesto en las Gobernaciones y Alcaldías que programan y ejecutan el presupuesto de acuerdo a las normas, técnicas y herramientas impartidas en el curso de programación y presupuesto impartido por el Programa.	1.14.1 Informes anuales de monitoreo y evaluación del Programa	
	1.15 El 100% de los estados y municipios participantes del Programa tienen acceso en línea a información actualizada sobre (a) entidades de atención, (b) indicadores sociales de niños, niñas y adolescentes, (c) vulneración de derechos, y (d) administración y finanzas del Programa al final de la ejecución.	1.15.1 Informes anuales de monitoreo y evaluación del Programa	
	1.16 El 70% de los miembros del CND, CEDs y CMDs y Consejos de Protección participantes del Programa, capacitados en: (a) uso de herramientas de información para el trabajo de oficina (procesador de texto, hojas de cálculo); (b) uso de Internet e intranet; y (c) uso de los sistemas de información del SPNA para el final de la ejecución.	1.16.1 Registro e informe de evaluación anual de capacitación aprobado por la UCP	
	1.17 100% del personal del CND capacitado en el desarrollo, administración y mantenimiento del sistema de información; y en los CEDs y CMDs participantes del Programa, capacitados en el uso de herramientas de operación y mantenimiento de sistemas para el final del Programa.	1.17.1 Registro e informe de evaluación anual de capacitación aprobado por la UCP	

Narrativo	Indicadores de Logro	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
	1.18 El 80% de los funcionarios del SPNA de los estados y municipios focalizados en el Programa conocen la LOPNA.	1.18.1 Informe anual de monitoreo y evaluación.	
	1.19 50% de las familias de las áreas del Programa manifiestan haber cambiado sus prácticas de crianza.	1.19.1 Informe final del Programa (monitoreo y evaluación).	
de Prevención de violación de derechos de adolescentes, a la aplicación de las acciones y los principios de la LOPNA, los y las.	2.1 80 % de proyectos ajustados a la problemática local son aprobados y ejecutados satisfactoriamente (dentro del cronograma, etc.).	2.1.1 Informe semestral de la Cartera de proyectos del Programa e informes semestrales de ejecución del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidades beneficiarias apoyan el Programa y participan activamente en la ejecución de la operación.</li> </ul>
	2.2 100% de los proyectos aprobados cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en el Programa.	2.2.1 Informes semestrales de ejecución del Programa.	
	2.3 100% del presupuesto del componente está comprometido al final del mes 42 de ejecución del Programa.	2.3.1 Informe semestral de ejecución.	
	2.4 30.000 niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente.	2.4.1 Informes final de monitoreo y evaluación del Programa.	
	2.5 90 personas capacitadas mensualmente en los estados y municipios en el restablecimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares .	2.5.1 Registro e informe de evaluación mensual de capacitación aprobado por la UCP 2.5.2 Informe bimensual de monitoreo y evaluación del Programa	
	2.6 90 personas capacitadas mensualmente en prevención de vulneración de derechos	2.6.1 Registro e informe de evaluación de capacitación aprobado por la UCP 2.6.2 Informe bimensual de monitoreo y evaluación del Programa	
	2.7 Al menos 1 de red de prevención constituida en cada estado y municipio participantes en el Programa al final de la ejecución de la operación.	2.7.1 Registro e informe anual de capacitación aprobado por la UCP	
	2.8 70% de la población beneficiaria de los proyectos manifiesta estar satisfecha con los servicios de atención financiados por el Programa .	2.8.1 Informes anuales de monitoreo y evaluación (beneficiarios)	

Narrativo	Indicadores de Logro	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
de ento y ón del a.	3.1 100% de los informes bimensuales de monitoreo son entregados oportuna y adecuadamente a partir del cuarto mes de ejecución.	3.1.1 Informes bimensuales de avance del Programa	
	3.2 100% de informes de evaluaciones anuales con recomendaciones son entregados oportuna y adecuadamente a partir del primer año de ejecución.	3.2.1 Informes anuales de monitoreo y evaluación.	
	3.3 Evaluación final del Programa presentada y aprobada	3.3.1 Documento de evaluación final aprobado.	
	3.4 Personal de la UCP, del CEDs y CMDs focalizados en los estados y municipios del Programa capacitados, para la institucionalización del sistema a partir del segundo año de ejecución.	3.4.1. Registro e informe de evaluación anual de capacitación aprobado por la UCP 3.4.2 Informes anuales de monitoreo y evaluación.	
	3.5 Los coejecutores (CND, CED y CMD) del Programa reciben información mensual del Programa a partir del mes 3 de ejecución.	3.5.1 Registro bimensuales de entrega (después del 3 mes ) a los ejecutores de informes de ejecución del Programa por parte de la firma contratada para el monitoreo y evaluación.	
	Insumos/Recursos		Actividades a Componentes
ción de res ales , de firmas ras y ón de	(Ver cuadro de Costos del Programa)	Registros Contables del Programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los fondos de contrapartida desembolsan oportunamente.</li> </ul>
ción, n y suscripción enios para la n de proyectos ón y ón de acuerdo anda/oferta.	(Ver cuadro de Costos del Programa)	Registros Contables del Programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultores/firmas consultoras idóneas se presentan en cada uno de los procesos de selección requeridos en el Programa.</li> </ul>
ción de firma ra.	(Ver cuadro de Costos del Programa)	Registros Contables del Programa	

## PLAN DE ADQUISICIONES

CONCEPTO	COSTO (miles de US\$)	NUMERO Y TIPO	FUENTE (%)		METODO	PERIODO DE CONVOCATORIAS
			BID	LOCAL		
<b>I. CONSULTORIAS</b>						
<b>A. IMPLEMENTACIÓN DE LA LOPNA</b>						
<b>1. Fortalecimiento Institucional</b>						
<b>a. Asistencia Técnica</b>						
Apoyo a la ejecución en los estados	1,960.0 (140 c/u)	14 firmas consultoras (1 por estado)	60%	40%	C	Del I semestre del 2001 al I semestre de 2004
Diseño estructura organizativa FNP	13.0	1 consultor individual	60%	40%	C	I semestre del 2001
Diseño estructura organizativa y procedimientos CED	50.0	1 firma	60%	40%	C	I semestre del 2001
Diseño estructura organizativa y procedimientos GMD	50.0	1 firma	60%	40%	C	I semestre del 2001
Sistema de planificación física-financiera	40.0	1 firma	60%	40%	C	I semestre del 2001
<b>b. Capacitación</b>						
Curso de formulación y evaluación.	337.6 (21.1 c/u)	16 consultores individuales	60%	40%	C	Del I semestre del 2001 al II semestre de 2003
Taller de marco lógico.	219.0 (6.5 c/u)	126 consultores individuales	60%	40%	C	Del I semestre del 2001 al II semestre de 2003
Taller de programación y presupuesto.	144.0 (9.0 c/u)	16 consultores individuales	60%	40%	C	Del I semestre del 2001 al II semestre de 2003
Taller de formación para el fortalecimiento de las familias	2,167.2 (17.2 c/u)	126 consultores individuales	60%	40%	C	Del I semestre del 2001 al II semestre de 2003
<b>c. Estudios</b>						
Evaluación de los principales programas a nivel nacional	180.0	1 firma	60%	40%	C	I semestre del 2001
Diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia a nivel de estados y municipios	1,400.0 (100.0 c/u)	14 firmas (1 por estado)	60%	40%	C	Del I semestre del 2001 al II semestre de 2003
Estudio de diseño de programas y servicios de protección a niñas	60.0	1 firma	60%	40%	C	I semestre del 2001
<b>2. Sistema de Información</b>						
Curso de automatización de oficina	88.7 (9.9 c/u)	9 firmas	70%	30%	C	Del I semestre del 2001 al II semestre del 2003

CONCEPTO	COSTO (miles de US\$)	NUMERO Y TIPO	FUENTE (%)		METODO	PERIODO DE EJECUCION
			BID	LOCAL		
Curso de administrador de base de datos	6.0	1 firma	70%	30%	C	Del I semestre del 2001 al II semestre del 2003
Curso administración de redes	5.2	1 firma	70%	30%	C	Del I semestre del 2001 al II semestre del 2003
Elaboración bases de licitación	30.0	1 consultor	70%	30%	C	I semestre del 2001
Estudio detallado de requerimientos informáticos	45.0	1 firma	70%	30%	C	I semestre del 2001
Diseño, construcción implantación y capacitación del sistema de información y bases de datos.	785.0	1 firma	70%	30%	CPI	I semestre del 2001
<b>A. Comunicación, Mercadeo Social y Participación</b>						
Apoyo en aspectos de comunicación, mercadeo social y participación.	224.0 (8.0 c/u)	28 consultores	60%	40%	C	Del I semestre del 2001 al I semestre de 2004
Diseño y producción de materiales	56.9 (28.5 c/u)	2 firmas	60%	40%	C	I semestre del 2001
Estrategias de capacitación	292.3 (20.9 c/u)	14 firmas	60%	40%	C	Del II semestre del 2001 al I semestre de 2004
Diseño y producción de campañas de comunicación	490.1 (245.0 c/u)	2 firmas	60%	40%	CPI	II semestre del 2001
<b>B. MONITOREO Y EVALUACION</b>						
Evaluación concurrente	2,000.0	1 firma	100%		CPI	I semestre del 2001
Evaluación final	200.0	1 firma	100%		CPI	II semestre del 2004
<b>II. BIENES</b>						
Equipos informáticos	1,877.1	1 firma	100%		CPI	I semestre del 2001 al II semestre de 2003
Equipos de oficina	161.0	1 firma			C	I semestre del 2001

**Leyenda**

C = Concurso

CPN = Concurso Público Nacional. Se efectuará Precalificación de Firmas.

CPI = Concurso Público Internacional. Se efectuará Precalificación de Firmas.

PROYECTO DE RESOLUCION

VENEZUELA. PRESTAMO \_\_\_\_/OC-VE A LA REPUBLICA BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA  
(Programa de Apoyo a la Niñez y Adolescencia)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Bolivariana de Venezuela, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Apoyo a la Niñez y Adolescencia. Dicho financiamiento será por una suma de hasta treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$30.000.000) de la Facilidad Unimonetaria de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a las "Condiciones Contractuales Especiales" y a los "Plazos y Condiciones Financieras" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.